



## LA "RESTITUTIO IN INTEGRUM" EN LA HISTORIA Y EN EL CODIGO DE DERECHO CANONICO DE 1983\*

JORGE DE SALAS MURILLO

**SUMARIO.-** INTRODUCCION. I. BREVE RECORRIDO HISTORICO DE LA "RESTITUTIO IN INTEGRUM". II. LA "RESTITUTIO IN INTEGRUM" EN EL CODIGO DE 1983. 1. Regulación codicial. A. Esquemas previos. B. Regulación definitiva. 2. Elementos de la *restitutio in integrum*. A. Sujetos. 1) Sujetos legitimados activamente. a) Las partes que se consideran perjudicadas. b) El promotor de justicia y defensor del vínculo. 2) Sujetos legitimados pasivamente. 3) Organó jurisdiccional. B. Objeto. 1) Revisión del proceso o rescisión de la sentencia. 2) Procesos cuyas sentencias son susceptibles de impugnación mediante *restitutio in integrum*. 3) Resoluciones susceptibles de impugnación mediante la *restitutio in integrum*. 4) Contenido. a) En general. b) Injusticia de la sentencia. 5) Supuestos contemplados por el canon 1645. a) *Restitutio in integrum* basada en pruebas falsas. b) *Restitutio in integrum* basada en documentos nuevos que prueben hechos nuevos. c) *Restitutio in integrum* por dolo. e) *Restitutio in integrum* por contradicción de una decisión precedente. C. Procedimiento. 1) Consideraciones preliminares. 2) Solicitud del recurso. 3) Preclusión. 4) Formas. 5) Admisión del recurso. 6) Trámites. D. Sentencia. 1) Sentencia rescisoria o anulatoria. 2) Sentencia restitutoria. 3) Recurso. 4) Ejecución. 3. Aspectos dogmático-jurídicos de la *restitutio in integrum*. A. Definición de *restitutio in integrum*. B. La cosa juzgada y el recurso de *restitutio in integrum*. C. Naturaleza de la *restitutio in integrum*. D. El recurso de *restitutio in integrum* y la casación civil. E. Consideraciones sobre el supuesto 4º del c. 1645. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFIA. ,

### INTRODUCCION

La *restitutio in integrum* es un remedio creado en el Derecho romano para eliminar los efectos de un acto jurídico válido pero injusto. Con él se pretendía favorecer a los meno

---

\* Director de la tesis: Prof. Dr. Carmelo DE DIEGO-LORA. Fecha de defensa: 27.VI.85.



res que por su indigencia eran fácilmente objeto de abusos y engaños. Fue un instituto muy popular y de uso frecuente en la práctica judicial romana. La Iglesia, continuadora en gran parte de la tradición jurídica romana, hizo suya esta institución y la amoldó a sus necesidades. Este es precisamente el objeto de nuestro trabajo: el estudio de la evolución histórica y de la naturaleza de la *restitutio in integrum* en el Ordenamiento canónico.

Lo hemos dividido en dos capítulos; en el primero, breve y a modo de introducción, esbozamos los antecedentes y la evolución histórica de este remedio jurídico desde sus comienzos en el Derecho romano hasta la codificación canónica de 1983. El segundo capítulo constituye el núcleo del trabajo, contiene el estudio del recurso extraordinario de *restitutio in integrum* en el Derecho vigente de la Iglesia. En los primeros apartados consideramos el desarrollo de los elementos del recurso: sujetos, objeto, procedimiento y sentencia; dejando para el final consideraciones generales como la relación con la cosa juzgada, etc. Procuramos dar nuestra opinión personal sobre este instituto y el papel que desempeña en el Derecho procesal canónico. Adjuntamos también las conclusiones -que exceden el ámbito de este estudio- de la totalidad del trabajo realizado y presentado como tesis doctoral; pensamos que así el lector podrá hacerse idea, lo más exacta posible, de este recurso procesal, de naturaleza genuina, cuyo último fundamento radica en la restauración de la justicia conculcada."

En la actualidad, este recurso canónico guarda grandes analogías con el recurso de revisión de los Ordenamientos civiles: tienen idéntico origen y la misma finalidad, reparar del mejor modo posible el efecto de una sentencia injusta pero válida que ha adquirido firmeza en el Ordenamiento respectivo.

## I. BREVE RECORRIDO HISTORICO DE LA "RESTITUTIO IN INTEGRUM"

La *restitutio in integrum* debe su origen al Derecho romano (1), donde nació por razones de equidad natural, para

---

(1) Zampetti, en su comunicación a los coloquios "Diritto romano-Diritto canónico" (18.II.1978), concluye que hay algunos principios fundamentales del proceso romano que prevalecen en el proceso canónico por encima de la influencia germánica. La *restitutio in integrum* es un remedio genuinamente romano, con la evolución que ha tenido, mientras que en la *querela nullitatis* se ha hecho sentir de un modo más determinante la influencia de los principios rectores del proceso germánico. Cfr. ZAMPETTI, G., "Prove, sentenza appelli in Diritto Canonico", en "Apollinaris" LII (1979), p. 149.

Otros autores como Badii son explícitos al afirmar: "históricamente, el instituto deriva del Derecho romano". Cfr. BADII, La *restitutio*



atemperar el rigor del derecho estricto. De allí se trasladó al foro eclesiástico, donde se recibió lo esencial de estas leyes romanas (2), sin que ello haga olvidar la evolución que también el legislador eclesiástico fue imprimiendo en esta materia, para adaptarla a las diversas necesidades canónicas. Permaneciendo en la substancia, este remedio fue objeto de una normativa pontificia que lo insertó mejor en el Ordenamiento de la Iglesia (3). Así, lo que comenzó en el Derecho romano siendo un instituto exclusivo para los menores de edad (4), la Iglesia lo extendió a otros sujetos que consideraba dignos de este favor (5).

En último término no puede olvidarse que la *restitutio* no es un instituto aislado, sino que ha dependido sobremanera de la génesis que tuvo la nulidad de la sentencia en el Derecho común, e igualmente de la regulación que sobre los tribunales de los Estados Pontificios dieron los Papas a partir del siglo XV (6).

---

in *integrum* nella legislazione canonica, en "Il diritto ecclesiastico", t. 39 (1908), p. 211.

(2) Desde su comienzo aparece su naturaleza claramente rescisoria: el pretor quiere eliminar los efectos de un resultado que considera *injusto*, pero que es válido *iure civile*. También desde el principio queda claro su carácter extraordinario: el pretor lo concede con justa causa, y debía decidir si la restitución era admisible y necesaria. No era necesaria cuando existía un remedio ordinario (acción o excepción) que pudiera dejar sin efecto un acto lesivo.

(3) Cfr. Concilio de Trento, ses. XXV, c. 19, y las posteriores constituciones de Benedicto XIV "Dei miseratione" y "Si datam".

(4) Cfr. WERNZ, F., *Ius Decretalium*, t. V (Prati, 1914), p. 557, n. 729.

(5) Cfr. *ibid.*, p. 557, n. 730.

(6) Es de destacar como síntesis histórica de los dos últimos siglos los siguientes pasos: Benedicto XIV reserva para la Santa Sede el conocimiento de este remedio contra la validez del vínculo de la profesión religiosa. De la regulación hecha por este Papa encontramos que la *restitutio in integrum* sólo es factible cuando hay dos sentencias conformes; actúa, por tanto, como segunda apelación. Pío VII fija el carácter devolutivo de la *restitutio* y estabiliza la praxis general de que dos sentencias conformes producen *res iudicata*. También proviene de este Pontífice la inclusión de otro motivo de concesión de la *restitutio*: la injusticia por no haberse tenido presente en el juicio algunas leyes o por haber contravenido manifiestamente una ley vigente. El carácter material o procesal de esta ley se discute. Los Papas posteriores se remiten a la normativa Piana. Gregorio XVI en su *Regolamento* precisó los casos de concesión pero no modificó la normativa anterior, aunque si intentó clarificar la duda planteada acerca de la ley procesal, incluyendo como violación de ley -motivo de concesión de la *restituto in integrum*-, lo





Del Código de 1917, se desprende que este remedio extraordinario se concede cuando no cabe el remedio ordinario de la apelación ni la querella de nulidad, *dummodo de evidenti iniustitiae rei iudicatae manifesto constet* (7). Los motivos de injusticia contemplan: el descubrimiento de la falsedad de los documentos que fundaron la sentencia; la aparición de documentos que prueben hechos nuevos y exijan perentoriamente una nueva decisión contraria a la anterior; la posibilidad de que la sentencia se diera por dolo de una parte en perjuicio de la otra, y cuando *legis prescriptum evidenter neglectum fuerit* (8).

## II. LA RESTITUTIO IN INTEGRUM EN EL CODIGO DE 1983

### 1. Regulación codicial

#### A. Esquemas previos

La doctrina ha sido unánime en solicitar del legislador una mejor regulación de la *restitutio in integrum*. La reforma del Código ha sido total: se ha elaborado un nuevo Código, respetando y recogiendo la riqueza valiosísima contenida en el Código de 1917, y se ha procurado mejorar la técnica legislativa, así como clarificar el derecho vigente en el Ordenamiento de la Iglesia. A la hora de reformar -mejorar- el instituto jurídico que estamos estudiando, el legislador, fiel a los principios inspiradores de la nueva codificación (9), ha seguido las pautas del anterior Código. El c. 299 del esquema de 1980 (10) modifica el antiguo c. 1905. La mayor dife-

---

que es motivo de nulidad de la sentencia. Ampliô, como decimos, el término de ley. El artículo 1059 del *Regolamento*, verdaderamente innovador en el ordenamiento canónico, fue suprimido por el Código de 1917.

S. Pío X, con las *Regulae servandae in iudiciis apud s. signature* Ap. Trib. de 1912 devolvió a la *querela nullitatis* la competencia propia para conocer los motivos de nulidad de la sentencia, mientras que el instituto de la *restitutio in integrum* actuaba como un remedio verdaderamente rescisorio.

(7) Cfr. c. 1905, par. 1. CIC.

(8) Cfr. c. 1905, par. 2. n. 4. CIC.

(9) Cfr. Const. Ap. *Sacrae disciplinae leges*, AAS 75 (1983), Pars. II, in principio. Vid. D'OSTILIO, *La Storia del nuovo Codice di diritto canonico* (Città del Vaticano, 1985), pp. 15 y ss.

(10) En la elaboración de este esquema es donde se encuentran los cánones de reforma de la *restitutio in integrum*. Cfr. *Communications* (Roma, 1979), p. 158.





rencia estriba en el n. 4 "*Legis substantialis praescriptum evidenter neglectum fuerit*" (11), y en el n. 5 "*sententia ad- versetur praecedenti decisioni quae in rem iudicatam transie- rit*". El n. 4 es una explicitación del anterior n. 4 del c. 1905: "Que se hayan infringido evidentemente las prescripcio- nes de la ley". Pero los Consultores no estaban de acuerdo: "De *sententia quorundam organorum consultationis locutio 'lex substantialis' non est clara et non eandem significationem in variis regionibus habet. Attenta hac ratione Consultores de- cernunt ut in n. 4 dicatur: 'legis non mere processualis prae scriptum ...'*" (12). Y así ha quedado en la redacción defini- tiva (13). El número 5, que también pasará al texto definiti- vo, no tiene precedentes en el Código anterior, pero sí en la doctrina (14).

El can. 300 del esquema modifica el antiguo can. 1906.

"1.- *Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in c. 299, par. 2, nn. 1, 2, 3 petenda est a iudice qui sen- tentiam tulit, intra tres menses, a die cognitae falsitatis vel doli computandos.*

2.- *Restitutio in integrum propter motiva, de quibus in c. 299, par. 2, nn. 4 et 5 petenda est a tribunali appella- tionis, intra tres menses a notitia publicationis sententiae, servatis de cetero quae de appellatione statuunt c. 287-290; quod si in casu de quo in c. 299, par. 2, n. 5, notitia prae- cedentis decisionis serius habeatur, terminus ab hac notitia decurrit.*

---

(11) Gordon, en su "Discurso general sobre los libros IV y V del Código", dice: "Il quarto motivo ... è stato oggetto di accesa prolungata e ancora non risolta discussione fra i canonisti: si tratta di una legge soltanto sostantiva o anche procedurale? -La maggioranza qualificata e forse anche numerica dei Dottori inclina in favore della legge sostanti- va; e in questo senso è stato formulato il c. 299 dello Schema de proces- sibus ...". "Periodica" LII (1979), p. 73.

(12) "Communicationes", ob. cit., pp. 158-159.

(13) Cfr. 1645, C.I.C. 1983.

(14) BAÑARES, J.I., *Evolución y naturaleza del T.S. de la Signatu- ra Apostólica* (t.d.) (Pamplona, 1979), p. 248, con mucho acierto apunta, antes de que viera luz el esquema, "A la jurisprudencia del Tribunal co- rresponde seguir confirmando si bajo el término injusticia por violación de ley -en la *restitutio in integrum*- se debe comprender cualquier lesión, no sólo de un derecho subjetivo formalizado, sino también -según venimos defendiendo- de todo interés legítimo jurídicamente tutelable -digno de protección jurídica-; porque la ley no es la única fuente de derecho -y menos, si cabe, en el derecho canónico- y porque estamos de acuerdo con los Prefectos de la Signatura en que su papel principal es la protección de la justicia *in casu*, protección que viene exigida por la misma equidad: *equitate exigente*". Cfr. también ROBERTI, F., *De processibus* (C. del Vati- cano, 1956) t. I, p. 374.



3.- Si is, qui ius habet petendi restitutionem in integrum, nondum vicessimum secundum aetatis annum expleverit cum termini, de quibus in par. 1 et 2, elabuntur, termini ipsi ad vicesimum secundum aetatis eius annum expletum prorogantur" (15).

El relator propuso una pequeña modificación de carácter gramatical (16), en el par. 1. Se suprime por considerar superflua la frase "servatis de cetero quae de appellatione statuunt cc. 287-290" y se reelabora el n.º. 3, que mejorando el del esquema, queda así: "termini de quibus supra non decurrunt, quamdiu laesus minoris sit aetatis" (17).

El c. 301 del Esquema, sin soporte en el Código de 1917, no prospera, ya que los consultores lo consideran superfluo; decía así: "Restitutio in integrum ne concedatur nisi auditis partibus".

El c. 302 pasa a ser definitivo íntegramente en el c. 1647 del Código; modificaba el anterior c. 1907.

"Proponente aliquo Consultore, aditur novus canon qui erat c. 302 bis his verbis redactur: 'Concessa restitutione in integrum, iudex pronuntiare debet de merito causae'". Será el futuro c. 1648.

Podría afirmarse que la única novedad acerca de la *restitutio in integrum*, introducida por el esquema de reforma, es la inclusión de la palabra *substantialis*, con todo lo que la misma conlleva. No obstante, los Consultores han preferido la expresión "*legis non mere processualis praescriptum*", que es semejante, aunque disminuye el riesgo, que caracterizaba a la anterior, de posibles equívocos. Con este matiz, los autores de la codificación han dado por concluida la polémica en torno a la infracción de leyes meramente procesales y de la posibilidad de impugnarlas por medio de la *restitutio*.

Como ya hemos apuntado, la reforma se basa en el Código anterior. Los autores de la reforma, en lo que respecta a nuestro instituto, no han seguido ni se han orientado en el "Ordinamento Giudiciario e Codice di Procedura Civile dello

---

(15) "Communicationes", ob. cit., pp. 158-159, art. 300 del esquema.

(16) "A die cognitae falsitatis vel doli computandos" pasa a redactarse "a die cognitionis eorumdem motivorum, computandos", que queda así en el texto definitivo, "Communicationes", ob. cit., p. 159.

(17) C. 1646, n. 3. La redacción que proponía algún órgano de consulta era la siguiente: "Pro minoribus terminis de quibus supra ab aetate maiore aetate computantur".



Stato della Città del Vaticano (18), de 1946, que, en palabras de Alcalá Zamora, es "uno de los cuatro o cinco que más presentes se deben tener en cualquier empresa de reforma procesal que se acometa, sea cual fuera el régimen político y religioso del país en que se lleve a cabo" (19).

### A. Regulación definitiva

El C.I.C. de 1983 (20) dedica cuatro cánones a regular la *restitutio in integrum* (1465-1468), que forman, junto con la "cosa juzgada", el título IX, sección I, parte II del libro VII "De procesibus".

Este título IX, una vez que en los títulos anteriores se ha regulado la sentencia y sus medios ordinarios de impugnación, atiende a la sentencia contemplada como resultado. El primer capítulo de este título se dedica a la cosa juzgada: se define el momento procesal en que la sentencia deja de ser recurrible, pues adquiere una cualidad terminativa por la que se hace apta para producir en el mundo jurídico la eficacia de los pronunciamientos concretos que contiene. El segundo capítulo arbitra un recurso específico y peculiar, de carácter extraordinario, que es la *restitutio in integrum*, el cual permite destruir esa eficacia si, a pesar de su corrección externa -validez- la sentencia encierra, por causa determinadas, una grave injusticia para alguna de las partes.

La reforma de la *restitutio in integrum* ha ido ligada al cambio operado por el legislador en la *querela nullitatis contra sententiam*. Este tipo de impugnación de la sentencia mantiene, en su esencia, el esquema de los antiguos cc. 1892-1897 del anterior Código, pero se han producido innovaciones de importancia.

El legislador ha eliminado las discusiones doctrinales acerca de la taxatividad de los cánones referentes a la nulidad de la sentencia que tanta repercusión tenían en la jurisprudencia, y ahora ha hecho de la sentencia "una cuestión clausurada, encerrada en las prescripciones de los cc. 1619-1627, sin que al margen de lo que está previsto quepa conce-

---

(18) Cfr. *Ordinamento Giudiciario e Codice di Procedura Civile dello Stato della Città del Vaticano* (tipografía poliglota vaticana, 1946). Este Código es el sucesor del "Codex Gregorianus", de 10.XI.1834, que ya se estudió en el capítulo anterior.

(19) ALCALÁ ZAMORA, N., *Estudios procesales* (Madrid, 1975), p.418.

(20) Utilizamos el C.I.C. edición anotada por profesores de la Universidad de Navarra, EUNSA, Pamplona 1983.





bir teórica o prácticamente cuestión alguna relativa a la nulidad de las sentencias" (21).

En el nuevo Código, la nulidad de los actos procesales o se encuentra sancionada en cánones concretos, o resulta de aplicar la doctrina general contenida en los cc. 10 y 124-127. El c. 1619, totalmente nuevo, declara que la sentencia subsana las nulidades cometidas durante el proceso, salvo las que se recogen en los cc. 1620 -vicios de nulidad insanables- y 1622 -vicios de nulidad sanables-. Esta sentencia firme purifica los vicios procedimentales y evita que lo no impugnado durante el proceso arrastre luego la nulidad de la sentencia (22). La limitación anunciada por el canon es que se trate de una causa que se refiera al bien de las personas privadas.

Por otro lado, el nuevo Código ha recogido como vicio de nulidad sanable el dictar sentencia contra el legítimamente ausente (23), que en el anterior Código quedaba protegido por medio de la *restitutio in integrum* para apelar (24).

## 2. Elementos de la "restitutio in integrum"

### A. Sujetos

#### 1) Sujetos legitimados activamente

##### a) Las partes que se consideran perjudicadas

Los cánones reguladores de la *restitutio in integrum* no establecen ningún criterio especial de legitimación. Debido a este silencio, hemos de estar a lo tabulado para los recursos ordinarios: tanto el c. 1626, para la interposición de querrela de nulidad, como el c. 1628, para la apelación, dan legitimación para proponer estos recursos a las partes

---

(21) DE DIEGO-LORA, C., *Código de Derecho Canónico*, edición anotada ... ob. cit., comentarios al título VIII, p. 969.

(22) Cfr. c. 1619 "Siempre que se trate de una causa que se refiera al bien de las personas privadas, quedan sanadas por la sentencia las nulidades de los actos establecidos por el derecho positivo que, siendo conocidas por la parte que propone la querrela, no hayan sido denunciadas al juez antes de la sentencia, quedando en pie lo que prescriben los cc. 1622 y 1623".

(23) "La sentencia adolece de vicio de nulidad sanable, y exclusivamente si (...) 6º fue dada contra una parte legítimamente ausente, de acuerdo con el c. 1593, par. 2". Cfr. c. 1622.

(24) Cfr. c. 1847.



que se consideran perjudicadas y al promotor de justicia y al defensor del vínculo cuando tienen derecho a intervenir en el litigio.

Se puede afirmar, por tanto, que las partes del primer proceso -tanto demandante como demandado- están legitimadas para proponer la *restitutio in integrum*, siempre que hayan sufrido un gravamen en la resolución que puso fin al mismo.

Si el título legitimador para interponer estos recursos (impugnación por querrela de nulidad y apelación) es restrictivo a padecer el gravamen o perjuicio, con mayor razón para el recurso extraordinario de la *restitutio in integrum*.

Respecto a los intervinientes o terceros, por el tenor del c. 1596 (25), el par. 3 contiene el principio -de gran tradición canónica- de que el tercero ha de aceptar la causa en el estado y término en que se encuentre. "Quien interviene en la causa ha de ser admitido en el estado en que ésta se encuentra, señalándole un plazo breve y perentorio para presentar sus pruebas, si la causa hubiera llegado ya al período probatorio". Conforme a estos principios, hemos de afirmar que el tercero, en tanto en cuanto el juez lo admita como parte, podrá recurrir (26). Este es el caso, admitido por la doctrina civil del interviniente principal, que es considerado verdadera parte (27). El interviniente principal se hace parte, y como tal está legitimado, si concurre en él la circunstancia de padecer un perjuicio; por ello cabe concluir que los intervinientes no deben ser admitidos al recurso, a menos que antes de que concluyera la causa, hayan sido admitidos procesalmente como partes. Es el caso, también, de una suce-

---

(25) El c. 1596 distingue los tres tipos de intervención del tercero que la doctrina señala: intervención principal, que toda la doctrina considera verdadera parte, porque este interviniente plantea una demanda que hubiera podido ser formulada con independencia total en el proceso, y sólo por criterios de economía procesal y muchas veces de prejudicialidad se acumula al proceso primitivo; litisconsorcial: el tercero no actúa con un derecho propio frente a las partes, como en la intervención principal, sino que, por su propio derecho, se suma a una de las partes para litigar contra la otra; y la intervención adhesiva o accesorio, cuando en base a un interés se adhiere a una de las partes, sólo ayudándole a que triunfe. Cfr. MADERO, L., *La intervención de tercero en el proceso canónico* (Pamplona, 1982), pp. 78-80, 124-126, 166-168.

(26) Para que el interviniente sea admitido como parte en el proceso, debe presentar al juez, antes de concluir la causa, un escrito donde exponga brevemente su derecho a intervenir. Cfr. c. 1596, par. 2.

(27) Cfr. MADERO, L., *ob. cit.*, pp. 91-94; FAIREN, V., *Notas sobre la intervención principal en el proceso civil*, Estudios de Derecho Procesal (Madrid, 1955), p. 218.



sión procesal: entonces los que tenían calidad de partes en el momento final del mismo -es decir, al dictarse la sentencia impugnada- están legitimados para la interposición del recurso de *restitutio in integrum* (28).

#### **b) El promotor de justicia y defensor del vínculo**

El promotor de justicia y el defensor del vínculo lo están legitimados activamente cuando tienen derecho a intervenir en el litigio (29). El promotor "por oficio está obligado a velar por el bien público" (30), de donde se colige que está legitimado para pedir la *restitutio in integrum* cuando el bien público se vea perjudicado. El defensor del vínculo que "de oficio debe proponer y manifestar todo aquello que puede aducirse razonablemente contra la nulidad o disolución" (31), pensamos que no está legitimado, pues su intervención sólo es obligatoria para aquellas causas sobre el estado de las personas (orden sagrado, matrimonio, y en la solución del vínculo conyugal) que precisamente "nunca pasan a cosa juzgada" (c. 1643), y a tenor del c. 1645 "contra la sentencia que haya pasado a cosa juzgada cabe la restitución *in integrum* ..." (32).

---

(28) No hay abundante jurisprudencia canónica al respecto. En la sentencia del 10.I.1983 de la Signatura Apostólica, cfr. "Periodica" LXXII (1983), pp. 113-128, se examina el *ius prosequendi causam nullitatis matrimonii post mortem partis*; la Sagrada Rota admite al nieto, heredero del actor muerto después de la primera sentencia, para que prosiga la causa, *nullum legis praescriptum neglexit*. La Signatura responde afirmativamente "seu admittendum esse ad disceptationem recursum patroni partis conventae", pero a la vez es tajante en cuanto al recurso de *restitutio in integrum* interpuesto por el nieto "Eadem vero disceptatione iam amplissime peracta: 'Negative, seu concedendam non esse restitutionem in integrum, in casu'".

El nieto es considerado parte perjudicada con derecho a la procección, pero se destina su recurso de *restitutio in integrum* interpuesto contra una causa que no pasa a cosa juzgada.

Sobre intervención de terceros y caducidad de la instancia, cfr. cc. 1521-1522 y c. 1641, 3º.

(29) Cfr. cc. 1430, 1433, 1626 y 1628.

(30) C. 1430, *in fine*. Su obligación de cuidar el bien público es por razón de su oficio: *officio tenetur*. Este oficio es eclesiástico, sin potestad de jurisdicción. El ámbito de sus intervenciones es amplísimo (vid. cc. 1674, 2º; 1721-1724; art. 27 de las Normas del Tribunal de la Sagrada Rota Romana, 29.VI.1934 (AAS 26 (1934), pp. 449-491).

(31) C. 1432.

(32) Cfr. también c. 1712. Para que haya firmeza de sentencia se requieren dos sentencias conformes. Contra la sentencia única, como ya





Respecto al defensor del vínculo **profesionis** somos de la opinión de que, por el silencio codicial, ya no existe esa figura, que se ha ceñido al vínculo sacerdotal (para aquellos religiosos que son sacerdotes) y ha desaparecido para las religiosas y religiosos no clérigos (33). Por lo tanto, ha perdido vigencia lo estipulado en la constitución *Si datam* de Benedicto XIV, que regulaba diversos aspectos de la **restitutio in integrum**.

No se trata de legitimación propiamente dicha, sino de una obligación impuesta al ejecutor de una sentencia para que suspenda la ejecución, "pero si le consta por otra parte que la sentencia es nula o **manifiestamente injusta**, de acuerdo con los cc. 1622, 1645, debe abstenerse de ejecutarlos y remitir el asunto al Tribunal que dictó la sentencia, notificándolo a las partes" (34). En estos casos, el ejecutor debe remitir la sentencia al Tribunal, explicando las razones que le han movido para abstenerse de ejecutarla y poniéndolo, a su vez, en conocimiento de las partes. Estas, si lo consideran oportuno, solicitarán la **restitutio in integrum**.

## **2. Sujetos legitimados pasivamente**

El c. 1648 dice "una vez concedida la **restitutio in integrum**, el juez debe pronunciarse sobre la sustancia de la causa", donde observamos que si el juez accede a la **restitutio in integrum** deberá pronunciarse de nuevo, en una segunda decisión judicial, sobre las peticiones de las partes tal como quedaron expresadas en la fórmula de las dudas del proceso revisado.

El legislador no ha establecido el procedimiento, pero del silencio del Código y por la naturaleza de esta causa de revisión no parece que necesite tramitarse según el mismo procedimiento de la causa revisada, sobre todo si éste fuese un proceso ordinario.

---

hemos dicho, caben los recursos de apelación y querrela de nulidad, pero contra la sentencia firme de las causas que no pasan a cosa juzgada, no procede la **restitutio in integrum**, sino más bien la revisión de causa (Vid. c. 1644).

(33) Cfr. c. 6. Tanto el Código de 1917 como el actual no hablan de esta figura, que se entiende incluida dentro de la del promotor de Justicia; así opina CABREROS DE ANTA, en *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, vol. III (Madrid, 1962), p. 288.

(34) C. 1654, par. 2. Este canon sustituye al c. 1921, par. 2, de C.I.C. de 1917, que daba facultad al ejecutor para abstenerse de ejecutar la sentencia si la estimaba manifiestamente injusta. Ahora, la ley sólo le da la facultad de suspenderla cuando advierta que la sentencia adolece de algún vicio de los tasados en los tres cánones citados. Volveremos



Del silencio legal concluimos como en el apartado precedente que la ley concede la posibilidad de ser parte opositora en el proceso de revisión únicamente a quienes hayan sido parte en el proceso que se trata de renovar.

Este es el parecer de algunos procesalistas civiles, como Gómez-Orbaneja, Herce-Quemada, que opinan respecto del recurso de revisión: "Partes en el procedimiento, independientemente de la voluntad del recurrente, son todos, y sólo ellos, cuantos hubiesen litigado en el pleito en que se dictó la sentencia impugnada, los cuales son emplazados por el Tribunal. Pero la pretensión no se deduce, como en la demanda, frente o contra otros, sino, como en los recursos, directamente contra el acto jurisdiccional. No es parte el tercero autor o partícipe en el hecho" (35).

Cuando el recurrente presenta el libelo de demanda de *restitutio in integrum*, el juez puede aceptarla o rechazarla, pero hasta ese momento el juez no tiene que notificar nada a la otra parte, pues respecto a la aceptación de la demanda los cc. 1505 y 1506 no establecen esa notificación. Antes de pronunciar la sentencia de *restitutio* el juez deberá oír la parte contraria. En los primeros esquemas del Código se prescribía que no se podía conceder la *restitutio in integrum* nisi auditis partibus (36), pero los consultores consideraron que este precepto era superfluo y lo eliminaron (37). Cuando el juez en su pronunciamiento declara la anulación de la sentencia impugnada, y, a continuación, el mismo tribunal (unipersonal, o colegiado) se pronunciará de nuevo sobre las peticiones de las partes tal y como quedaron fijadas en la formulación de dudas del proceso revisado. En este segundo proceso (38), sígase el procedimiento que se siga, también es obligado notificar y dar audiencia a las partes, que no podrán ser sino aquéllas que intervinieron en el primer proceso.

### 3. Órgano jurisdiccional

Establece el c. 1646: "1.- La restitución *in integrum* por motivos indicados en el c. 1645, par. 1 y 3 debe pedirse

---

a ello cuando se estudie el procedimiento de rescisión.

(35) Cfr. GÓMEZ ORBANEJA-HERCE QUEMADA, *Derecho Procesal Civil* (Madrid, 1975), t. 1, p. 461.

(36) Cfr. "Communicationes", 11, 1979, art. 301, p. 159.

(37) "Suggestum est ut hic canon deleatur quia superfluus". Cfr. *ibid.*, p. 159.

(38) Cfr. c. 1648.







No hay ningún inconveniente doctrinal en que el mismo juez que dictó sentencia juzgue después -en los casos del 1646, par. 1- la admisibilidad de este recurso. Así, Covián respecto del recurso civil de revisión, opinaba que "los legisladores modernos -se refiere a los del siglo XIX- sienten la doctrina de que ha de ser el mismo juez que dictara la sentencia impugnada, pues tal circunstancia hace que se halle, con preferencia a cualquier otro, en situación de apreciar los motivos de revisión que se propongan contra aquélla, y no se ofende en manera alguna el amor propio tratándose sencillamente de corregir errores, que si fueron acaso cometidos hasta por él mismo en persona, obedecieron a causas de todo punto independientes de su voluntad" (43). Por si acaso, el legislador canónico ha preferido conferir más competencias al tribunal de apelación.

## **B. Objeto**

### **1. Revisión del proceso o rescisión de la sentencia**

"Contra la sentencia que haya pasado a cosa juzgada cabe la restitución *in integrum* ..." (44). Parece que esta contundencia del texto legal hace que la *restitutio* sea taxativa para este tipo de sentencias. No obstante, encontramos en el mismo Código otros supuestos donde el legislador permite utilizar la *restitutio in integrum* para impugnar otro tipo de resoluciones; así en el c. 1460, par. 2, queda indicada contra la resolución que deniega la excepción de incompetencia relativa; también la jurisprudencia ha admitido este recurso contra el decreto inapelable que decide la recusación (45). Aunque en este último caso también cabría impugnarlo con querrela de nulidad dependiendo de la naturaleza del vicio que afecta a la decisión.

De todo lo cual se desprende que la *restitutio in integrum* es un instituto más amplio que el regulado en el c.1645, y que su objeto no es sólo la sentencia firme, u otras resoluciones inapelables, sino el proceso mismo. Guasp afirma que el objeto del proceso "puesto que éste se define como institución jurídica destinada a la satisfacción de una pretensión, es esta pretensión misma" (46). La demanda determina el obje-

---

(43) COVIÁN, De la revisión en materia civil, en "Revista de los Tribunales" (Madrid, 1898), p. 529.

(44) C. 1645, *in principio*.

(45) Cfr. c. 1451; y SRRD, 25.V.1962, c. Sabattani, 54 (1692), pp. 263-266.

(46) GUASP, J., *Derecho Procesal Civil* (Madrid, 1961), p. 219. El concepto formal de este autor sobre la satisfacción de la pretensión es



to del proceso, y la sentencia es el acto jurisdiccional que intenta satisfacer la pretensión de justicia aducida en la demanda. Por ello, el objeto del recurso de **restitutio in integrum** no es sólo la sentencia, sino de algún modo también el mismo proceso anterior. Doval de Mateo señala con gran claridad, respecto del recurso de revisión civil; "no podemos olvidar que la finalidad de la revisión viene dada, necesariamente, por la situación injusta, que la determinación irrevocable del derecho en lo concreto producida en un proceso anterior ha creado, y que, por lo tanto, esa finalidad ha de ser la de rescindir esa situación injusta mediante la rescisión del proceso que la ha creado" (47).

Este recurso ha quedado limitado por el legislador a los supuestos en los que una decisión judicial ha alcanzado un grado de inapelabilidad (48) o una firmeza de la sentencia, efecto de la cosa juzgada. Por ello estudiaremos a continuación qué procesos son susceptibles de impugnación por este recurso extraordinario, y más adelante examinaremos los fallos o resoluciones judiciales objeto del mismo.

## **2. Procesos cuyas sentencias son susceptibles de impugnación mediante restitutio in integrum**

Parece que el legislador no ha querido exceptuar ningún proceso; el único requisito es que la sentencia haya pasado a cosa juzgada; y como no pasan a cosa juzgada las causas relativas al estado de las personas y las de separación conyugal, no cabe contra éstas recurso extraordinario de **restitutio in integrum** (49). En estos procesos específicos se produce firmeza de sentencia cuando hay dos sentencias conformes, pero contra la sentencia firme el legislador ha establecido la **revisión de causa** (50). Salvo estos procesos, específicos,

---

minoritario en la doctrina .

(47) DOVAL DE MATEO, J., *La revisión civil* (Barcelona, 1979), p.92.

(48) Vid. los supuestos contemplados en los cc. 1451 y 1460, par.2.

(49) Cfr. cc. 1643 y 1644. Hay que hacer constar que en estos procesos cabe la **restitutio in integrum** contra los decretos inapelables que no son sentencia, en virtud de los cánones citados en la nota anterior. No obstante como ya hemos dicho, pueden ser decretos nulos y compete la querrela de nulidad. En el caso del c. 1643, por su misma naturaleza estos autos son nulos porque aquí no se restituye nada.

(50) Cfr. c. 1644. Vid. GIL DE LAS HERA, F., *¿Se puede admitir la restitución "in integrum" en los casos matrimoniales?* en "Ius Canonicum" 14 (1974), pp. 373-380.



donde se dilucidan cuestiones relativas al estado de las personas, el legislador ha querido que el recurso extraordinario de *restitutio in integrum* quede abierto a todo proceso judicial para enmendar la trascendental injusticia que en él se haya podido cometer.

### 3. Resoluciones susceptibles de impugnación mediante la *restitutio in integrum*

"Contra la sentencia que haya pasado a cosa juzgada, cabe la *restitutio in integrum* ..." (51). El c. 1618 afirma: "la sentencia interlocutoria o el decreto tienen fuerza de sentencia definitiva si impiden o ponen fin al juicio o a una instancia del mismo, al menos por lo que se refiere a una de las partes en causa" (52). El Código, consciente de que en la tramitación de la causa principal pueden surgir cuestiones incidentales que exigen juicios y pronunciamientos específicos (53) aparte del principal, establece que tomen la forma de sentencia o decreto dependiendo de su gravedad y de la discrecionalidad del juez. La doctrina entiende que se debe pronunciar sentencia interlocutoria cuando al decidir la cuestión incidental se produzca un efecto definitivo de importancia; ahora bien, el c. 1618 se refiere indistintamente tanto a la sentencia interlocutoria como al decreto, debido a que ambos pueden alcanzar la fuerza de sentencia definitiva. Será, entonces, el juez quien elija la forma de decisión.

Por lo tanto, la *restitutio in integrum* no se restringe solamente a la sentencia definitiva de la causa principal, sino que, por analogía legal, son susceptibles de rescisión las sentencias o decretos si impiden o ponen fin al proceso principal a través de una cuestión incidental, lo cual se explica en cuanto que el Código les da el carácter de sentencia definitiva. El mismo Código, como ya expusimos, en el c. 1460, par. 2 admite literalmente la *restitutio in integrum* contra la resolución de la excepción de incompetencia relativa (54). El decreto a que se refiere el c. 1618 debe ser motivado (55).

---

(51) C. 1645.

(52) Vid. también c. 1607.

(53) Cfr. cc. 1587-1597.

(54) El Código pide que estas cuestiones se resuelvan cuanto antes, porque son presupuestos procesales correspondientes a elementos de la relación jurídica, en este caso, del órgano jurisdiccional.

(55) Cfr. c. 1617. Si un decreto meramente ordinatorio pusiere fin al juicio o a una instancia del mismo, sería nulo a todas luces ("carecen de toda eficacia", se expresa el canon) y contra él sería susceptible el remedio ordinario de *querela nullitatis* (cfr. c. 1622, nº. 2). Un decreto





#### 4. Contenido

##### a) En general

El contenido del objeto de este recurso es la pretensión de rescisión de la sentencia primitiva. Esta pretensión se ha de basar unas veces en la prueba de nuevos hechos distintos de los que se probaron en el proceso del que ahora su sentencia se intenta rescindir, y otras en el menosprecio de la ley de una decisión precedente que haya pasado a cosa juzgada (56). Pero ello no significa, a nuestro entender, que esta pretensión del recurso sea una **nueva pretensión** o una transformación tal de la demanda que la convierta en una **nueva demanda**. Fairén define la transformación de la demanda como "Alteración del referido proceso incoado, que viene determinada por una transformación del **petitum** o la fundamentación formulados en aquel instrumento, o sea, por el ejercicio de una nueva pretensión independiente al lado o en lugar de la ya ejercitada, llevada a cabo por el autor" (57). No obstante, hemos de decir, que, **de facto**, hay una nueva demanda que intenta dejar sin efecto la sentencia, pero se mantiene la anterior en relación con la nueva sentencia que se ha de pronunciar; por ello no se puede decir jurídicamente que se transforme la demanda.

La **restitutio in integrum** es un recurso extraordinario cuya pretensión, efectivamente, consiste en rescindir la sentencia injusta y por lo tanto el proceso en lo que quede afectado por el vicio alegado, volviendo las situaciones jurídicas derivadas de la sentencia impugnada **ad pristinum statum**. Este **petitum** del libelo de demanda del recurso de **restitutio** no es un nuevo **petitum**, y, por consiguiente, una pretensión diferente, sino que es jurídicamente la misma. Entendemos que la pretensión originaria del proceso se dirigía a la consecución de un solo fin jurídico, y por una serie de eventos no se consiguió; es más, se produjo una sentencia válida pero injusta, y esto es lo que se quiere rescindir. La petición de rescisión por no haberse alcanzado el resultado deseado está **implícita** en el **petitum** de la demanda. Ahora bien, sólo se concederá este recurso cuando conste la manifiesta injusticia de la sentencia que se haya producido por alguna de las

---

ordinatorio no puede -es imposible, dejaría de ser ordinario- poner fin al juicio o a la instancia. Sobre este apartado. Vid. el artículo de BENITEZ, J., Sobre la ampliación de la "restitutio in integrum" a las resoluciones que tengan carácter definitivo, en "Ius Canonicum" 14 (1974), pp. 405-415.

(56) Cfr. c. 1645.

(57) FAIREN, V., La transformación de la demanda en el proceso civil (Santiago de Compostela, 1949), p. 17.



cinco causas enumeradas en el c. 1645 (58). Esto es así porque la *restitutio in integrum* está configurada técnicamente como un recurso contra la sentencia. Las partes, al comenzar el litigio y formular sus pretensiones encuentran que el Ordenamiento pone a su disposición un recurso extraordinario por si acaece la eventualidad de concluir con una sentencia válida pero injusta, si se dan algunos de los motivos establecidos en el cuerpo legal.

De algún modo podemos decir con Guasp que no existe este recurso sin un *novum*, "sin una circunstancia que, comparada con el proceso principal, resulte independiente y desligada, formal y materialmente, de él", y cuando se trata de hechos nuevos, "estas novedades procesales pueden no ser novedades de existencia o *nova facta* estricta, sino novedades de conocimiento o *nova reperta*, sin más. Es decir, que no tanto se impone que se trate de un hecho como que, por lo menos, sea nuevo el conocimiento que de él tenga la parte que trata de imponer el recurso" (59). Estas circunstancias nuevas, ca-

---

(58) La doctrina civil es mayoritaria en afirmar que el recurso de revisión, paralelo en los Ordenamientos civiles a la *restitutio in integrum*, es "un proceso autónomo respecto del que tratamos de rescindir, mediante la interposición de la demanda revisoria, y de ahí el que no se trate de una transformación de la demanda, sino que es una nueva demanda, con nuevo *petitum* y fundada en nuevos hechos". DOVAL DE MATEO, J., *ob. cit.*, pp. 105-106; cfr. también PRIETO-CASTRO, L., *Tratado de Derecho procesal civil*, II (Pamplona, 1985), p. 591; DE LA OLIVA, A., y FERNANDEZ, M., que afirman que la revisión "es una demanda rescisoria autónoma con carácter constitutivo", en *Lecciones de Derecho Procesal* (Barcelona, 1984), t. II, p. 443. Guasp manifiesta que la revisión "es un verdadero recurso, y, por tanto, una provocación de la acción judicial para conseguir cambiar una sentencia que no se considera conforme con el Ordenamiento jurídico", pero antes ha manifestado: "También aquí las dudas que otros recursos suscitan se plantean con menor gravedad, puesto que no es frecuente confundir a la revisión como una mera continuación o renovación eventual de las actuaciones de las instancias anteriores. El recurso de revisión, en fuerza misma de la motivación extrínseca que lo inspira, viene siempre configurado como un proceso de naturaleza distinta e independiente de aquél en que se emite la sentencia que se trata de revisar. Para los partidarios de concebir al recurso como una prolongación de tales actuaciones de instancia, esto plantea el problema de la diferenciación radical entre la revisión y los otros tipos de impugnación, como a veces se propone llamando a tales tipos medios de gravamen y, en cambio, a la revisión, *acción impugnativa autónoma*. Mas, en realidad, considerados los recursos como procesos distintos de aquéllos en que se emite la resolución impugnada, todos podrían considerarse como acciones impugnativas autónomas; la diferencia, por lo tanto, no estaría en que la revisión guardase esa independencia, supuestamente específica, con relación al proceso principal a que se refiere". GUASP, J., *ob. cit.*, pp. 1546 y 1545.

(59) GUASP, J., *Ibid.*, p. 1551.



paces de rescindir la sentencia y de provocar un nuevo pronunciamiento del juez, tienen que ser tales que hagan constar la manifiesta injusticia de la sentencia y entrar a conocer de nuevo sobre el fondo del asunto.

## **b) Injusticia de la sentencia**

"... Cabe la restitutio in integrum, con tal de que conste manifiestamente su injusticia" dice el c. 1645. Este recurso viene a remediar una situación de injusticia provocada por la sentencia. El canon establece la exigencia de que conste manifiestamente la injusticia. A consecuencia de lo cual el recurrente debe razonar en el libelo de demanda en qué consiste la injusticia -que normalmente se traducirá en una lesión sufrida- indicando el supuesto concreto en el que se apoya. En la demanda lo debe indicar de tal modo que el juez la considere como fumus boni iuris, pero sólo se acreditará ciertamente tras la práctica de la prueba.

La injusticia manifiesta está intrínsecamente unida a los cinco supuestos contemplados por el Código. No basta con la sola alegación, sino que, en cierto modo, requiere una prueba, pero esa prueba, entendemos, no es otra diferente de la indicada en los supuestos del parágrafo segundo. La manifiesta injusticia se comporta como causa petendi restitutionis y se ha de apoyar en los cinco supuestos tasados. La prueba se dirige inmediatamente a examinar el supuesto alegado, y de modo mediato a comprobar si se ha producido la injusticia.

A mi juicio, la injusticia, en sí misma considerada, no requiere ninguna prueba distinta a la del supuesto alegado; pero tampoco se puede establecer de modo absoluto la afirmación de que basta que se dé algún supuesto del c. 645, par. 2 para que se produzca una injusticia. Por ello veremos en el apartado siguiente qué condiciones requieren cada uno de los supuestos para probar que se ha producido una manifiesta injusticia de la sentencia.

## **5. Supuestos contemplados por el c. 1645**

### **a) Restitutio in integrum basada en pruebas falsas**

El primer motivo o supuesto legal regulado por el Código consiste en que la sentencia impugnada en base de tal manera en pruebas que posteriormente se hayan descubierto falsas, y que sin tales pruebas la parte dispositiva de la sentencia resulte insostenible. De la lectura del texto legal se desprende los siguientes requisitos: 1º.- Caben todo tipo de





**pruebas (60);** el legislador se refiere a los medios de prueba o instrumentos para poder llevar la prueba al proceso; por ejemplo, la declaración de las partes, el testimonio, el documento (61), la inspección, los dictámenes periciales, los indicios, etc.

El C.I.C. sigue un criterio de amplitud en la presentación de pruebas (62) y la doctrina ha elaborado un elenco muy completo de especies diversas de pruebas (63), pero no se debe incluir como medio de prueba el juramento de decir la verdad (64), porque sólo es una garantía de diferente valor según la religiosidad de las personas, su sinceridad y su fidelidad a lo que sabe y dice ante el juez. En cambio, sí lo es la confesión judicial (65). El documento, aunque acto extraprocesal, es un medio de prueba judicial de muy diverso valor, dependiendo de la fe que merezca (66). El nuevo Código abre la *restitutio* contra todo tipo de medio de prueba, sin restringirla sólo al documento, como hacía el Código de 1917

---

(60) "Los canonistas describen la prueba judicial como la manifestación de un hecho dudoso y controvertido hecha al juez por medio de argumentos legítimos. En esta descripción están contenidos diversos elementos: 1) un medio instructorio; 2) la acción aclaratoria que aporta el medio a favor o en contra del hecho dudoso y controvertido: es la finalidad o efecto inmediato; 3) el destinatario, que es el juez; 4) el efecto último, que es producir en el juez, previo juicio valorativo sobre la eficacia del medio instructorio, la certeza moral sobre la verdad histórica de los hechos alegados, objeto de la prueba", DEL AMO, L., en *Código de Derecho Canónico, edición anotada ... ob. cit.*, p. 917.

En el C.I.C. 1917 la prueba se restringía al documento, cuando decía en el c. 1905, par. 2, n. 1. "Que la sentencia se funde en documentos cuya falsedad se descubra posteriormente".

(61) El documento también se contempla en el número siguiente, pero desde otro punto de vista; en el n.º. 1, el documento debe probarse que es falso; en el n.º. 2, se hace referencia a documentos posteriores a la sentencia que aportan hechos nuevos.

(62) Cfr. c. 1527, par. 1: "Pueden aportarse cualesquiera pruebas que se consideren útiles para dilucidar la causa y que sean lícitas".

(63) Cfr., por ejemplo, las once divisiones que León del Amo establece sobre diversidad de pruebas en *Código de Derecho Canónico, edición anotada ... ob. cit.*, p. 919.

(64) Cfr. c. 1532.

(65) Cfr. cc. 1535-1538.

(66) Cfr. cc. 1541-1542.



(67).

2º.- Que se han descubierto ser falsas. La falsedad de las pruebas debe descubrirse después de dictada la sentencia (68). No se requiere que todas las pruebas aducidas resulten ser falsas, sino solamente aquéllas que hayan afectado sustancialmente a la sentencia. En el caso del c. 1638 -"la confesión o cualquier otra declaración de una parte carece de todo valor si consta que ha sido emitida por error de hecho o arrancada por violencia o miedo grave"- se contempla en este primer supuesto no sólo el error de hecho, sino también la violencia o miedo grave que no siempre se pueden incluir en el supuesto de dolo recogido en el parágrafo tercero (69).

En el caso de prueba documental, la falsedad puede ser castigada, además, con una pena justa -según la gravedad del delito-, tal como declara el c. 139. No obstante, pensamos que no es necesaria una previa condena penal de falsificación de documentos, como ocurre en algunos ordenamientos civiles, sino que basta, por analogía con el c. 1541, exponer argumentos contrarios y evidentes si se trata de documentos públicos (70); en cambio, si el documento es privado, es más fácil de-

---

(67) Por esa restricción al sólo documento, diversos canonistas se preguntaban por la amplitud que se debía dar al concepto de documento. Para Lega-Bartocetti comprendía todo tipo de pruebas: "*Discipiendum quid veniat nomine documentorum. Et respondemus comprehendere omnem speciem probationum; nempe instrumenta, attestations testium, iusiurandum, vota peritorum, partium confessiones. Quandoquidem iudex moralem certitudinem haurire debet ex actis et probatis* (c. 1869, par. 2) *seu ex qualibet probationis specie in actis relatae*", LEGA-BARTOCETTI, en *Commentarius in iudicia ecclesiastica* (Roma, 1950), vol. III, p. 36.

Mientras otros autores como Wernz-Vidal sostienen que sólo se trata de documentos en su significación más precisa, sean públicos o privados. Cfr. WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum*, t. VI, *De Proccesibus* (Roma, 1927), p. 587; también MORENO, M., en *Derecho Procesal Canónico*, vol. I (Barcelona, 1975), p. 418.

(68) "*Quorum falsitas deprehensa seu detecta est (ab actore aut reo) postquam sententia pertransit in rem iudicatam*". SRRD, 30.I.1970, c. Abbo, 62 (1970), 20, p. 93.

(69) En caso de error, sea por la circunstancia que sea -ignorancia, equivocación, inconsciencia, o falta de ciencia propia- lo confesado o declarado carece de todo valor, pero es preciso probar en juicio el error cometido.

(70) "*Iudicis est aestimare utrum falsitas sit certa, et casu quo adversarius contradicat probabilibus argumentis, illius est sententia iudiciali decernere de falsitate*". LEGA-BARTOCETTI, *ob. cit.*, p. 38, n. 10. Cfr. SRRD, 11.3.1930, c. Parrillo, 22 (1930) 13, p. 155 y SRRD, 27.5.1939, c. Janasik, 31 (1939) 35, p. 323. La prueba que desvirtúa la fuerza del documento público son argumentos contrarios y evidentes. Son contrarios aquellos argumentos que demuestren sustancialmente lo contrario de lo



mostrar su falsedad, dependiendo, no obstante, de que el documento haya sido reconocido o no (71).

Cuando hablamos de documentos falsos, hay que entender tanto el documento falso *stricto sensu* (falsificado, alterado, etc.) que normalmente contiene hechos falsos; como el documento auténtico que contiene hechos falsos; e igualmente el documento falso que contiene hechos verdaderos (72). Pensemos que la *restitutio in integrum* cabe contra los tres supuestos, excepto contra el último cuando no se trate de documento como medio de prueba *ad solemnitatem* para la validez del acto, en cuyo caso actuaría también la *restitutio*.

Por último, la falsedad de la prueba debe ser cierta: "*Falsitas nimine sufficit controversa sed semper requiritur*" (73).

3º.- Que hayan afectado sustancialmente a la sentencia, de modo que sin tales pruebas la parte dispositiva de la sentencia resulte insostenible. Como dice Moreno, "la sentencia ha de basarse en dichos documentos (pruebas) precisamente. De modo que el fundamento básico para el convencimiento del juez en su silogismo lógico jurídico, han de haber sido precisamente tales documentos (pruebas) cuya falsedad es manifiesta; por tal modo que si el ánimo del Juez se ha convencido en parte por documentos (pruebas) verdaderos y en parte por falsos, o bien en documento (prueba) en parte verdadero y en parte falso, deberá valorarse proporcionalmente, como en relación de causa a efecto, el *quantum* de la falsedad y la parte en que ha influido en la decisión. A la vista de esto, si, a pesar del documento (prueba) falso, el Juez está convencido de que para nada han influido en la sentencia, no cabe duda que la sentencia será la misma en el juicio rescisorio" (74).

---

afirmado en aquel documento; mientras que reciben el nombre de evidentes los que destruyen de un modo fehaciente las pruebas contrarias. Cfr. c. 1541.

(71) Cfr. c. 1542.

(72) Se excluye el documento auténtico que contiene hechos verdaderos. Más posibilidades no caben. Todos los documentos públicos o privados, para merecer fe en el juicio, deben ser auténticos (gozar de verdad en cuanto a su origen y autor) y genuinos (aquello que narran se ajusta a la verdad objetiva del acto). Cfr. comentario al c. 1540 en Código de Derecho Canónico, edición anotada ... ob. cit., p. 926.

(73) Cfr. SRRD, 30.1.1970, c. Abbo, 62 (1970), 20, p. 93.

(74) MORENO, M., ob. cit., pp. 418-419. Los paréntesis son nuestros.





Y, como expone el mismo autor, para nada influye el medio por donde ha sido descubierta tal falsedad. Lo esencial es que la prueba sea ciertamente falsa y que, además, sea el fundamento de la sentencia" (75).

El recurrente debe probar la falsedad de la prueba, y también que la parte dispositiva de la sentencia se ha basado sustancialmente en ella.

#### **b) Restitutio in integrum basada en documentos nuevos que prueben hechos nuevos**

Esta segunda causa consiste en que después de la sentencia el interesado en la **restitutio** aporte nuevos documentos. Sin embargo, no todo nuevo documento es causa suficiente para la aplicación de la **restitutio in integrum**; para que ésta se produzca deben cumplir varios requisitos imprescindibles: en primer lugar, que demuestren la existencia de hechos nuevos, obviamente no examinados por el Juez; en segundo término, que tales hechos, una vez probados con evidencia, exijan una nueva decisión. A continuación delimitaremos estos requisitos:

1º.- **Aportación de documentos nuevos**, públicos o privados (76) que no fueron objeto de examen en el juicio antes de dictarse la sentencia. Creemos que el juez sólo debe admitir documentos en su sentido estricto: las escrituras aptas para probar en juicio (77). Estos podrán ser públicos -ecle-

---

(75) *Ibid.* p. 419. Cfr. SRRD, 19.5.1921, C. Massimi, 13 (1921), 11, p. 112.

(76) Cfr. cc. 1541-1542. Sobre el documento público eclesiástico ver el artículo del profesor DE DIEGO-LORA, **Naturaleza y supuesto documental "in casibus specialibus"** en "Ius Canonicum" 14 (1974), pp. 287 y ss. El documento en sentido amplio es todo objeto o cosa que pueda mostrar al juez la verdad histórica de un hecho. Así, una fotografía, monumentos, cintas magnetofónicas, o cinematográficas, discos, pinturas, etc. En sentido estricto son documentos sólo las escrituras aptas para probar en juicio. Sobre el concepto general de documento en Derecho civil ver también DOVAL DE MATEO, J., *ob. cit.*, pp. 111-117, y la bibliografía allí indicada.

(77) En la praxis canónica, el medio de prueba por excelencia es el documento escrito, y pensamos que para la seguridad jurídica debe entenderse así, aunque ello no es óbice para que en algunos casos especiales, el juez o tribunal puedan admitir una concepción más amplia del documento, siempre que pruebe sin lugar a dudas un hecho nuevo que exija una decisión contraria; porque ese bien es superior y la **restitutio in integrum** es un instituto que nació para temperar el rigor del **ius strictus**. Vid. no obstante, la opinión del profesor DE DIEGO-LORA, en *ob. cit.*, pp. 294-295. En los Ordenamientos civiles, el criterio de los tribunales es restrictivo a entender como documento el escrito.



siásticos o civiles (78)- y privados. El juez debe tenerlos como auténticos y genuinos, pues si no, carecen de valor probatorio.

2º.- **Después de la sentencia:** "Si se descubren posteriormente documentos". El descubrimiento debe ser posterior a la sentencia y la parte así debe probarlo. En caso de que la parte hubiese ocultado el documento o no lo hubiese querido presentar en el momento oportuno (79), esos documentos ya no son nuevos y no son susceptibles de fundamentar la restitutio in integrum.

3º.- **Que prueben sin lugar a duda hechos nuevos.** Estamos en el caso de *facta nova*. Se trata de hechos nuevos que no se sometieron a examen por el juez, bien porque se desconocían o porque se ocultaron por el adversario (80), o por caso fortuito. Como hechos también pueden considerarse circunstancias de un hecho juzgado que mudan de tal modo el hecho que pueda calificarse como hecho nuevo.

4º.- **Que exigen una decisión contraria.** Los hechos nuevos que no se sometieron al examen judicial deben exigir claramente, después de probados con evidencia, una nueva decisión del juez (81).

Por lo tanto, puede concluirse que, en este segundo supuesto, el documento recobrado ha de ser decisivo, esto es, que si se hubiera aportado en el proceso, el contenido de la sentencia firme hubiera sido distinto, y los hechos nuevos han de ser de tal importancia que si el juez los hubiera podido apreciar al dictar la sentencia, ésta hubiera tenido un sentido contrario (82).

---

(78) Por ejemplo documentos judiciales, administrativos, notariales, etc.

(79) Cfr. c. 1546. La no aportación del documento únicamente puede deberse o bien a fuerza mayor, o a circunstancias imprevisibles o previsibles pero inevitables. Es muy difícil que prospere el recurso si se debe a ignorancia; si se trata de actitud dolosa de la parte contraria. También se puede plantear el recurso por ese título.

(80) Aunque esto puede dar lugar a *restitutio* por dolo.

(81) "Si postea detecta fuerint documenta quae facta nova et contrariam decisionem exigentia peremptorie probent; i.e., facta ignorata durante iudicio, sive quia occultata ab adversario sive fortuito, modo non fuerint occultata ex dolo restitutionem petentis; atque ita peremptorie probantia decisionem contrariam ut eisdem exceptio probabilis minime opponi possit", SRRD, 30.1.1970, c. Abbo, 62 (1970), 20, p. 93.

(82) El término contrario es concluyente. Se trata de una decisión contraria al anterior. El legislador no quiere que se utilice este recurso para mejorar una sentencia, sino para cambiarla. Y si el juez observa



### c) "Restitutio in integrum" por dolo

"Si la sentencia ha sido originada por el dolo de una parte y en daño de la otra" (83).

Esta causa es una consecuencia del principio recogido en el c. 125, par. 2; "el acto realizado por miedo grave injustamente infundido, o por dolo, es válido, a no ser que el derecho determine otra cosa; pero puede ser rescindido por sentencia del juez ...".

Se considera válido el acto realizado por dolo de la otra parte, a no ser que el derecho disponga otra cosa (84). La sentencia originada por dolo es válida, pero rescindible. El legislador otorga esta causa siempre que se den los siguientes elementos:

1º. La sentencia ha sido originada por el dolo de una parte. El dolo tiene que haber sido la causa de esa sentencia. Por dolo podemos entender "engaño, fraude, fingimiento" (85). El Dr. De Diego-Lora entiende por dolo "maquinación fraudulenta" cuando en sus comentarios a este canon afirma "que haya meditado, para obtener sentencia favorable, maquinación fraudulenta de una de las partes ..." (86).

El dolo es un elemento intencional que para ser motivo de **restitutio in integrum** no hace falta que sea cualificado, aunque el mero dolo incidental no puede constituirse en causa de este recurso extraordinario (87). La relación que debe haber entre la sentencia y el dolo tiene que ser estrecha: de modo que si no hubiera tenido lugar el dolo, la sentencia no se habría dictado en esos términos.

Pensamos que con el dolo de una parte en daño de otra, también puede ser motivo de **restitutio in integrum** el cohecho

---

que el hecho o hechos nuevos no llevan una decisión contraria, no debe conceder la **restitutio in integrum**".

(83) Cfr. c. 1645, par. 2, nº. 3.

(84) Dispone la nulidad del matrimonio (c. 1098), la nulidad de admisión al noviciado (c. 643), la nulidad de profesión religiosa (c. 656), y la nulidad *ipso iure* del voto hecho por dolo (c. 1191).

(85) CASARES, J., *Diccionario ideológico de la Lengua española*, voz DOLO (Barcelona, 1966), p. 305.

(86) DE DIEGO-LORA, C., *Código de Derecho Canónico*, edición anotada, ob. cit., p. 985. Esta opinión es muy acorde con el concepto romano de dolo; ya Labeón definió el dolo malo como "toda malicia, engaño o maquinación para valerse de la ignorancia de otro, engañarle o defraudarle". Cfr. D. 4.3.1.2. (Ulp. XI ad ed.).

(87) Cfr. MORENO, M., ob. cit., p. 419.





o prevaricación (c. 1386). En este caso de soborno activo con aceptación de la dádiva o promesa por parte del juez (soborno pasivo) se produce un fenómeno de codelinquencia que permite acudir al juicio penal, donde se obtendrá, como consecuencia, la acción de reparación de daños, que es mucho más amplia que el recurso de *restitutio in integrum* (88). No obstante, como no se contempla en el Código que esta figura diera lugar a la nulidad de la sentencia, pensamos que hay que dejar abierta la puerta a la *restitutio in integrum*, en cuyo proceso bastará probar el dolo de la parte, sin que le haga falta tener que demostrar el cohecho. También puede, como hemos indicado, acudir al juicio penal para hacerse con la acción de reparación de daños y perjuicios.

El dolo debe provenir de una de las partes. Así, con mucho acierto expone Moreno: "si el dolo proviniere de colisión entre el Procurador de una parte y la parte adversa, no existiría este dolo específico de la sentencia; cabría entonces al mandante una acción contra el Procurador y la otra parte por fraude para obtener la indemnización por daños, sin perjuicio de la acción criminal pertinente" (89).

Si la otra parte no ignora el dolo, se produce consentimiento, y entonces no hay lugar para la *restitutio*, porque implica la renuncia del propio derecho.

2º. Y en daño de la otra. La parte debe haber sufrido un perjuicio por ese dolo, que puede ser el mismo gravamen o perjuicio por la sentencia contraria. El dolo, por lo tanto, ha de ser eficaz, debe influir directamente, aunque no exclusivamente, en la decisión, y debe producir un daño en la otra parte (90). Prosperaría el recurso de *restitutio in integrum* basado en este capítulo siempre que la sentencia sea el resultado directo del dolo, aunque no exclusivo, de tal forma que si no hubiera existido esa actitud dolosa, la sentencia no se hubiera dictado con el mismo contenido con que se dictó.

---

(88) Cfr. c. 128. Las legislaciones civiles, como la española e italiana, admiten el cohecho como capítulo de dolo para la revisión de la sentencia. Cfr. art. 1796, n. 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Madrid, 1984). Asimismo, art. 395, n.º. 6 del Codice di Procedura civile italiana. También lo admite el n.º. 2 del art. 414 del Codice di procedura civile dello Stato della città del Vaticano, 1946.

(89) MORENO, M., ob. cit., p. 420.

(90) "Si sententia ex dolo partis prolata fuerit in damnum alterius, nempe ex fraude vel artificio iniusto (et quidem ab alterutra parte directe aut ex mendacio) proveniente atque causam sententiae dante". SRRD, 30.1.1970, c. Abbo, 62 (1970), 20, p. 93.



#### d) "Restitutio in integrum" por menosprecio de una ley

Este es el primer motivo de derecho especificado por el Código como causa de **restitutio**. En los supuestos anteriores se consideran como motivos de rescisión el error de hecho en la apreciación del Juez por la falsedad o por el engaño a que ha sido sometido; en cambio éste y el siguiente supuesto consideran el error del juez al aplicar el derecho, tanto común como particular, tanto legal o consuetudinario. Y también porque no se ha aplicado el precepto legal pertinente o por haber cometido un error en su apreciación. Se entiende, claro está, que este error o menosprecio tienen que ser de categoría e influir en la parte dispositiva de la sentencia. Los requisitos necesarios para conceder la **restitutio in integrum** por este capítulo son:

##### 1) Evidente menosprecio

El legislador ha utilizado el término **neglectum** que podemos traducir por descuidar, no apreciar, menospreciar, hacer con negligencia, ser indiferente a, etc., vocablos que significan una acción positiva del juzgador de no tener en cuenta la prescripción de la ley. Empero no ha de restringirse sólo a una conducta dolosa del juez, sino que independientemente de la buena o mala fe del juez, este canon se refiere a la acción objetiva del juzgador: haber menospreciado una prescripción legal. **Neglectus** no se entiende sólo a la no aplicación (comisión) de una prescripción, sino también al error -como intelección no correcta- de un precepto legal (91).

##### 2) De una prescripción legal

Pensamos que de la aplicación al término "legal" del principio "**favorabilia amplianda, odiosa restringenda**" (92), aquél puede ampliarse a la norma consuetudinaria que tenga fuerza de ley por cumplir los requisitos del c. 23 (93); también le alcanza al decreto general y a las instrucciones en tanto en cuanto son considerados por el legislador como leyes

---

(91) "... In utroque casu neglectus habetur cum iudex sive legem male intellexit sive iam omisit ad casum applicare", SRRD, 30.1.1970, c. Abbo, 62 (1970), 20, p. 93.

(92) Recogido implícitamente por el c. 18.

(93) Partidario de esta interpretación amplia del término legal es Moreno Hernández, cuando decía, refiriéndose al n. 4 del c. 1905 del anterior Código, "este motivo considera error de derecho común o particu-



(94). En cambio, a nuestro juicio los actos administrativos singulares no pueden fundamentar una *restitutio in integrum* por este capítulo (95).

### 3) De una ley "no meramente procesal"

Como hemos afirmado ya en varias ocasiones el legislador concluye una larga polémica, dando la razón a aquellos autores que entendían debía concederse la *restitutio* sólo contra la inobservancia de leyes materiales o sustantivas (96). Por lo tanto, se ha de entender de todas aquellas leyes civiles, penales o de cualquier otra naturaleza, exceptuando las leyes meramente reguladoras del proceso (97). Esta inobservancia o menosprecio debe afectar a la parte dispositiva de la sentencia.

#### e) "Restitutio in integrum" por contradicción de una decisión precedente

"Si la sentencia contradice una decisión precedente que haya pasado a cosa juzgada".

---

lar escrito o consuetudinario". MORENO, M., ob. cit., p. 420.

(94) Cfr. cc. 29-34.

(95) Ni los decretos, preceptos singulares, rescriptos o privilegios o dispensas pueden entrar en la *restitutio* como prescripción legal, por la falta de generalidad. Desde luego, pueden ser capítulo de *restitutio* en tanto en cuanto son documentos de derechos singulares, que habrán de aportar las partes en el juicio. Por este capítulo sí tienen cabida, pero no por el que ahora es objeto de nuestro estudio, ya que, al faltar la generalidad, el juez no tiene obligación de conocer la norma. Lo mismo se puede afirmar de los estatutos y los reglamentos. Cfr. cc. 94 y 95. No obstante lo afirmado, si se considerase el precepto singular como ley -como entiende parte de la doctrina- entonces cabría contra éste la *restitutio in integrum*.

(96) En el *schema* se cambió "*substantialis*" por "*non mere procesualis*", en atención a evitar equívocos. "*Si legis praescriptum evidenter neglectum fuerit. Qui neglectus, iuxta quosdam Auctores, exclusive refertur ad leges constitutionales seu substantivas, quae scil. afficiunt meritum causae, iuxta alios respicit etiam leges mere procesuales*". Así se expresa esta sentencia de 1970 cuando trata de este capítulo de *restitutio in integrum*, SRRD, 30.1.1970, c. Abbo, 62 (1970), 20, p. 93.

(97) La no observancia de estas leyes meramente procesales dará lugar a invalidez de la sentencia, en virtud de los cc. 1620 y 1622, o si los vicios procedimentales no se contemplan en esos cánones, se sanarán conforme a lo indicado en el c. 1619.





El último capítulo contemplado en el c. 1645 hace referencia a que exista una sentencia anterior, dictada en sentido contrario, que hubiera pasado a cosa juzgada. Este supuesto de *restitutio* no tiene precedentes en el Código de 1917. Se debe, en gran parte, "a que la cosa juzgada no ha quedado regulada, en el nuevo Código, como excepción sólo dependiente de la iniciativa de parte, sino que es también apreciable *ex officio*: ha pasado a pertenecer al bien público de la iglesia, tal como se considera por el c. 1452" (98). Los requisitos para que se pueda fundamentar la *restitutio* en este capítulo son los siguientes:

1º. Si la sentencia contradice: hace referencia a que la sentencia que se quiere rescindir con este recurso extraordinario debe contradecir ("decir lo contrario de lo que afirma") la decisión que ha pasado a cosa juzgada. Pensamos que este verbo no admite interpretación; por lo tanto sólo cabe el recurso cuando lo contradicho afecta a la esencia de la sentencia.

2º. Una decisión precedente que haya pasado a cosa juzgada. Por decisión ha de entenderse exclusivamente sentencia, ya que técnicamente es ésta la única decisión judicial tipificada por el Ordenamiento Canónico para producir los efectos de cosa juzgada (99). Entre la sentencia impugnada y la decisión precedente deben darse las tres identidades de las que se hace mención en el c. 1641, par. 1: a) los mismos litigantes, b) sobre la misma petición, c) hecha por los mismos motivos.

Si faltase alguna de estas identidades -en cuanto a las personas, a la petición y a la causa de pedir- no se daría de modo pleno la contradicción de la sentencia, y por lo tanto no podría concederse el recurso de *restitutio in integrum* ya que no constaría manifiestamente su injusticia.

## C. Procedimiento

### 1) Consideraciones preliminares

El nuevo Código de Derecho Canónico, en el c. 1452, man tiene unos principios de gran importancia para el proceso en general y también para el instituto que estamos estudiando. Estos, en síntesis, son los siguientes.

a) Respecto del principio dispositivo: en todo negocio que interese sólo a los particulares, el juez únicamente puede proceder a instancia de parte;

---

(98) DE DIEGO-LORA, D., Código de Derecho Canónico, edición anotada ... ob. cit., p. 985.

(99) Cfr. cc. 1641-1644.



b) El juez puede proceder de oficio cuando lo pide el bien público: en todas las causas criminales y aquéllas que interesan al bien público de la Iglesia o a la salvación de las almas;

c) "El juez puede además suplir la negligencia de las partes en la presentación de pruebas o al oponer excepciones (100), siempre que lo considere necesario para evitar una sentencia gravemente injusta, quedando firmes las prescripciones del c. 1600" (101).

El c. 1600 prescribe: par. 1. "Después de la conclusión de la causa, el juez puede llamar a los mismos o a otros testigos, o mandar que se practiquen pruebas no pedidas con anterioridad, solamente: (...) 3º. En todas las causas, cuando es verosímil que, de no admitirse una nueva prueba, la sentencia habrá de ser injusta por las razones expuestas en el c. 1645, par. 2, 1º. 3º". Este precepto supone otra excepción al principio de preclusividad de la causa, que el legislador ha querido mantener para evitar -por todos los medios- que se llegue a una sentencia gravemente injusta. Es una prueba más del carácter extraordinario del recurso de *restitutio in integrum*, porque el Código no sólo quiere que se agoten todos los medios ordinarios, sino que también estimula una actividad *ex officio* del juez, tendente a proseguir el período probatorio -pese a que ya se concluyó la causa- antes del pronunciamiento, en los casos en que el juez observa o tiene motivos suficientes para sospechar de la falsedad de la prueba, o para justificar la presentación de nuevos documentos que contradigan de modo indudable la decisión, o sospecha que una parte ha actuado dolosamente en daño de la otra.

Estas nuevas pruebas las pueden proponer las partes, y también pueden ser ordenadas *ex officio* por el juez, aunque el canon no lo dice expresamente (102).

El prof. De Diego-Lora, en su comentario a este canon, señala con acierto: "Aunque la cuestión no estará exenta de dificultades, en estos casos se trata de anticiparse a la eventual *restitutio in integrum* contra la sentencia que resulte injusta por causa de determinados vicios radicados especialmente en la prueba" (103).

---

(100) Véase, por ejemplo, el c. 1642, par. 2, donde se permite al juez declarar de oficio la excepción de cosa juzgada para impedir que vuelva a introducirse la misma causa.

(101) C. 1452, par. 2.

(102) Está implícito en el c. 1452 "para suplir la negligencia de las partes".

(103) DE DIEGO-LORA, C., en *Código de Derecho Canónico*, edición anotada ... ob. cit., p. 959.



## 2) Solicitud del recurso

Si se ha producido la sentencia gravemente injusta, la parte perjudicada puede recurrir presentando un libelo de demanda de restitución, donde razone la manifiesta injusticia de la sentencia y el capítulo por el que solicita la **restitutio in integrum**.

La **restitutio in integrum** que se fundamenta en los motivos indicados en el c. 1645, par. 2, n.º. 1-3, se debe solicitar del mismo juez que dictó la sentencia. Cuando se fundamenta en alguno de los otros dos motivos, se debe solicitar al tribunal de apelación del que antes pronunció la sentencia (104).

El juez o tribunal que se trate admitirá o no la demanda de restitución si se cumplen los requisitos del c. 1505. A la demanda deberá acompañar copia de la sentencia que desea impugnar.

## 3) Preclusión

El mismo c. 1646 señala el plazo legal de tres meses, común para los cinco motivos. Para su cómputo, el canon establece el día a **quo** de modo diverso según el supuesto que sirve a la **causa petendi**, y teniendo en cuenta, también, la peculiaridad de cada motivo. Así tenemos que, en los tres primeros supuestos, el plazo comienza a correr "a partir del día en que se tuvo conocimiento de los motivos" (105). Cuando se trata de los motivos 4º y 5º, "desde que se tuvo noticia de la publicación de la sentencia; pero en el supuesto del c. 1645, par. 2, n.º. 5, si se llegó al conocimiento de la decisión precedente más tarde, el plazo comienza a transcurrir a partir de entonces" (106).

"Los plazos arriba establecidos no comienzan a computar se mientras el perjudicado sea menor de edad" (107). Para el menor se dilata el término a **quo** al día de comienzo de mayoría de edad. Es la única especialidad referida al menor de edad que encontramos en la nueva regulación de este instituto jurídico. La acción de **restitutio in integrum** que el menor

---

(104) Cfr. c. 1646, par. 1 y 2.

(105) *Ibid.* Estos son: 1) descubrimiento de la falsedad de la prueba; 2) descubrimiento de nuevos documentos; y 3) descubrimiento del dolo.

(106) *Ibid.*, para el cómputo del tiempo, cfr. cc. 202-203.

(107) C. 1646, par. 3.





poseía en la legislación anterior (108), el actual Código la ha reducido a la dilación del término a *quo*.

El Código no establece los efectos de la preclusión (109). ¿Estos plazos son de caducidad o preclusión de derecho?. A mi entender estamos ante plazos de caducidad o plazos fatales como entiende el código. Este plazo tiene carácter legal y es de tracto temporal continuo, si bien el término a *quo* queda indeterminado.

La redacción del c. 1646 estipula claramente que el plazo comenzará cuando se tenga conocimiento de los motivos, lo cual lleva consigo un amplio margen de tiempo para interponer este recurso extraordinario. La prescripción viene tanto por la falta de interés en no presentar el recurso en un plazo -largo, de tres meses- en el que se tiene conocimiento, como de la seguridad jurídica del Ordenamiento.

En la demanda de restitución debe hacerse referencia a que la petición se hace dentro del plazo legal. No obstante, como es un plazo que comienza a contar cuando se llega al conocimiento del motivo, se presta a una gran discrecionalidad por parte del juez.

Si los plazos de apelación (110) son considerados plazos fatales, esto es, perentorios; con mayor razón deberán considerarse así los establecidos para este recurso extraordinario. Si no se dice lo contrario, y en nuestro instituto el Código no se pronuncia, los plazos legales son improrrogables y perentorios (111).

#### 4) Formas

Aunque el C.I.C. guarda silencio, pensamos que a tenor del c. 1502 debe entenderse la obligación de presentar la demanda de restitución por escrito, o, en todo caso oralmente cuando concurren las circunstancias enunciadas en el c. 1503. Junto al escrito de demanda, donde se especificará todo lo solicitado en el c. 1504 (112), el recurso necesita los si-

---

(108) Cfr. cc. 1687 y 1688 del Código de 1917.

(109) Los Ordenamientos civiles respecto del recurso de revisión son tajantes, así el art. 1800 de la ley de enjuiciamiento civil española, que dice: "si se presentare pasado este plazo, se rechazará de plano".

(110) Cfr. c. 1633.

(111) Cfr. c. 1465.

(112) Con la peculiaridad de que esta demanda se interpone como los recursos, es decir, contra la resolución judicial, por lo que no es



guientes requisitos aditivos:

a) Si se basa en el n.º. 2, deben acompañarse los documentos descubiertos posteriormente;

b) Presentar copia del fallo al que se refiere el n.º. 5 del c. 1645, par. 2, cuando se fundamente en ese motivo;

c) Señalar en el libelo qué prescripción de ley ha sido inobservada (para el n.º. 4);

d) Razonar la falsedad de las pruebas, así como el dolo de la otra parte, cuando se base en los motivos primero o tercero respectivamente.

### 5) Admisión del recurso

Si el juez admite el recurso, se produce el efecto señalado en el c. 1647: "la petición de restitución in integrum suspende la ejecución de la sentencia si aún no ha comenzado a realizarse". Suspensión que se produce ope legis, pero con mandato del juez o del tribunal ordenando dicha suspensión. "Sin embargo, cuando por indicios probables se sospecha que la petición se ha hecho para demorar la ejecución, el juez puede mandar que se ejecute la sentencia, dando las oportunas garantías al peticionario para el caso de que se le conceda la restitución in integrum" (113).

Como se ve, este efecto suspensivo solo se producirá cuando todavía no se ha comenzado a ejecutar la sentencia; si además el juez observa indicios de que la demanda, pese a tener el fumus boni iuris necesario para ser admitida, se limita a la finalidad de demorar esa ejecución, el juez podrá decretar la ejecución, pero exigirá del ejecutante que preste la debida caución para asegurar que se cumplirá la restitución, caso de que ésta se pronunciase a favor del impugnante (114). Esta caución puede entenderse exigible por analogía a lo que se dispone en el c. 1650, I, par. 2 in fine.

---

necesario especificar individualmente la persona contra la que se propone. De todas formas, habrá de decirse a quién se ha de citar para contestar la demanda.

(113) C. 1647, par. 2.

(114) En los ordenamientos civiles tiende a practicarse de modo contrario, así, por ejemplo, el art. 1803 de la ley de enjuiciamiento civil española, que establece: "Las demandas de revisión no suspenderán la ejecución de las sentencias firmes que las motiven. Podrá, sin embargo, el Tribunal, en vista de las circunstancias, a petición del recurrente, dando fianza y oído al Ministerio fiscal, ordenar que se suspendan las diligencias de ejecución de las sentencias (...)".



Asimismo, el juez o tribunal deberá observar las normas establecidas por el obispo acerca del depósito de dinero o garantía que se ha de prestar sobre el pago de costas y el resarcimiento de daños (115).

## 6. Trámites

El Código no se pronuncia respecto a qué procedimiento se debe seguir. "Anular una sentencia, que pasó a cosa juzgada, exige un procedimiento que ofrezca al menos las mismas garantías que aquél en que se dictó, y -si hay anulación y además, pronunciamiento sobre la cuestión de mérito-, reclama una resolución judicial en forma de sentencia es decir, con las mismas solemnidades que la anulada. Pero, de otro lado, el proceso mismo de restitución no deja de tener un objeto muy limitado, que se reduce a la comprobación de si se dieron o no algunos de los supuestos del c. 1645, par. 2; y la nueva sentencia que en su caso se dicte por segunda vez sobre el mérito de la causa, viene precedida de todo lo tramitado en el proceso anterior, cuya sentencia se anuló, aparte de lo que específicamente se tramite como consecuencia de la demanda de restitución. Cabe por ello pensar que esta causa de revisión no necesite exactamente tramitarse según el procedimiento mismo de la causa revisada, si éste fue un proceso ordinario" (116).

Efectivamente, somos de la misma opinión que el profesor De Diego-Lora, pues no nos parece necesario seguir los trámites del proceso ordinario. Todo parece apuntar a que el procedimiento más indicado es el contencioso oral. "Del proceso contencioso oral se prescribe (cfr. c. 1656) que será aplicado a toda causa que por derecho no quede excluida, salvo que la parte pida el proceso contencioso ordinario. Al no expresar nada en contrario los cc. 1645-1648, cabe opinar que el trámite que se ha de aplicar es el propio del contencioso oral, por hallarnos ante una hipótesis comprendida en el c. 1656. Sólo cabría decir, en contra de esta opinión, que el Código pudo haberlo previsto así, como lo hizo el c. 1627, con el procedimiento de la querella de nulidad" (117).

Como ya quedó apuntado en su momento, los consultores

---

(115) Cfr. c. 1649. Esta caución previa contenida en el n.º. 5 del citado canon, es diferente de la caución exigida del ejecutante de la sentencia para asegurar que se cumplirá la restitución. Vid. c. 1647.

(116) DE DIEGO-LORA, C., Código de Derecho Canónico, edición anotada ... ob. cit., p. 987.

(117) Ibid.





eliminaron de la regulación codicial el precepto contenido en los esquemas previos que prescribía la imposibilidad de conceder la *restitutio in integrum*, nisi auditis partibus (118). Esto quiere decir que en la mente de los consultores estaba la idea de que este procedimiento debía regirse por alguno de los contemplados en el Código, bien el de las causas incidentales (119) bien el del contencioso oral (120); procedimientos que permiten conciliar la rapidez y economía procesal junto con el principio de garantía de partes. "Por dirigirse la *restitutio in integrum* contra una sentencia que pasó a cosa juzgada, el objeto de esta causa y su procedimiento rechazan toda calificación que los pueda equiparar a una causa incidental; resulta más fundada, en consecuencia, la opinión antes expuesta, en el sentido de que, al objeto que aquí se pretende, su cauce procesal más adecuado es el que deriva de la aplicación del c. 1656" (121).

El c. 1656, par. 2, dice: "son nulos los actos judiciales si se emplea el proceso oral fuera de los casos permitidos por el derecho", y el mismo Código establece expresamente que se seguirá este procedimiento para las causas incidentales (c. 1590, par. 1), separación de cónyuges (c. 1693) y la *querela nullitatis* de la sentencia (c. 1627). En el par. 1 de este canon se permite tratar según el proceso contencioso oral todas las causas que no haya excluido el derecho, salvo que una de las partes pida que se siga el proceso contencioso ordinario. La parte interesada sólo podría manifestar su voluntad de seguir el proceso ordinario en la contestación a la demanda. Será el juez, a la vista de todo el proceso anterior, quien decidirá sobre el procedimiento a seguir, a fin de evitar demoras y retrasos innecesarios.

En principio, se tramitará por este procedimiento, el cual tienen su eje central en la audiencia de partes (122), donde se recogen las pruebas y se procede de inmediato a la discusión de la causa.

El procedimiento comienza con la interposición de la demanda. A este respecto opino que la parte activa no tienen por qué interponer un nuevo escrito; basta el anterior libelo, que sirvió de demanda de restitución; así se cumplen los requisitos establecidos en el c. 1658. Como el juez ya los examinó, lo que verdaderamente inicia este procedimiento es la actividad tendente a la resolución de la sentencia ante-

---

(118) Cfr. "Communicationes", 11, 1979, p. 159.

(119) Regulado en los cc. 1587-1591.

(120) Comprendido en los cc. 1656-1670.

(121) DE DIEGO-LORA, C., Código de Derecho Canónico, edición anotada ..., ob. cit., p. 987.

(122) Cfr. cc. 1661-1668.



rior. Citará al demandado (123), remitiéndole copia de la sentencia y concediéndole la facultad de enviar sus respuestas por escrito en el plazo de 15 días (124). El demandado se puede oponer con todo tipo de excepciones, incluso plantear demanda reconvenzional frente al actor (125).

El resto del procedimiento debe regirse por lo estipulado en los cc. 1660-1670. No obstante, como es un procedimiento muy específico, pues se trata de confrontar la existencia o no de alguna causa del c. 1645 y pronunciarse sobre una causa que ya ha sido conocida, el juez puede hacer uso de las facultades que le otorga el c. 1670 para lograr mayor rapidez y dictar nueva sentencia (126).

#### D. Sentencia

##### 1) Sentencia rescisoria o anulatoria

El juez o tribunal competente que ha admitido la demanda de **restitutio in integrum** después de realizado el procedimiento debe pronunciarse afirmativa o negativamente sobre la concesión de este recurso extraordinario. La sentencia que falle a favor de la **restitutio** declara la anulación de la sentencia impugnada, "a modo de casación civil" (127). En esta sentencia, el juez o tribunal motivarán el fallo, que es un verdadero **judicium rescindens**. En un momento posterior, el juez, "una vez concedida la **restitutio in integrum**, debe pronunciarse sobre la sustancia de la causa" (128).

Por lo tanto, las causas de **restitutio in integrum** contarán con dos decisiones judiciales: la primera a modo de **judicium restitutorium**, donde el tribunal entrará a conocer de nuevo sobre las peticiones de las partes, tal como se expresa

---

(123) Cfr. cc. 1509-1511.

(124) Cfr. c. 1659.

(125) Cfr. c. 1494.

(126) "(...) Puede sin embargo el Tribunal, por decreto motivado, y sin detrimento de la justicia, derogar las normas procesales cuyo cumplimiento no se requiere para la validez, a fin de lograr mayor rapidez", c. 1670.

(127) DE DIEGO-LORA, C., *Código de Derecho Canónico*, edición anotada, ob. cit., p. 986. Según este autor, la anulación es "a modo" de casación, pero no significa, ni mucho menos, que este instituto tenga la misma naturaleza o efectos de la casación.

(128) C. 1648.



ron en la fórmula de dudas del proceso revisado (129).

El contenido de esta sentencia será dictaminar únicamente si compete la *restitutio* y bajo qué capítulo de los aducidos en la demanda. Debe contener también la declaración de anulación de la sentencia anterior. Con esta sentencia de *restitutio* se abre el camino para llegar al nuevo pronunciamiento sobre la causa (130), al *iudicium rescisorium* o *restitutio-rium*.

### 3) Sentencia restitutoria

Termina este proceso contencioso oral con la sentencia restitutoria, si le ha precedido la sentencia rescisoria. En la segunda el juez se pronuncia sobre la sustancia de la causa. De todo punto es necesario tener en cuenta que esta sentencia debe pronunciarse precisamente sobre la causa originaria, es decir, debe dirimir, a tenor del c. 1611, 1º, la controversia primigenia.

El c. 1668 establece que, si de la discusión no se deduce la necesidad de una instrucción supletoria o la existencia de otro impedimento para dictar sentencia, el juez debe decidir la causa inmediately, al terminar la audiencia y a so-

---

(129) Esta es la opinión del profesor De Diego-Lora (Cfr. *Código de Derecho Canónico, edición anotada ...*, ob. cit., p. 986 y también la de Cabrereros de Anta, que dice explícitamente -aunque respecto de la normativa de 1917-: "Una vez concedida por el juez competente la restitución *in integrum* o rescisión de la sentencia dada, es preciso que el juez mismo que pronunció la sentencia reasuma de nuevo la causa (...), y dicte nueva sentencia, que sustituya a la que fue restituida, en el mismo grado de ésta". Cfr. CABREROS DE ANTA, M., *Comentario al Código ...*, ob. cit., pp. 643-644.

En cambio, MORENO, M., en ob. cit., p. 422, no es de esta opinión; para él sólo se debe dictar una sentencia: "La sentencia dada en las causas de restitución tiene como característica el que en ella se han de resolver estas tres cuestiones:

1ª. Si se puede admitir la petición de restitución y la consiguiente instancia judicial.

2ª. Si se ha de revocar la primera sentencia (*iudicium rescidens*).

3ª. Si se da una nueva sentencia, resolviendo de diversa manera el mérito de la causa (*iuxta nova allegata et probata; iudicium restitutorium*).

La sentencia ha de contener la motivación de los antedichos elementos, y se llegará a ella después de la instrucción, discusión y demás trámites procesales canónicos ordinarios".

A tenor del c. 1648, pensamos que en el nuevo Código no se puede hablar de una única sentencia, sino de dos.

(130) Cfr. c. 1648.





las; además, debe leerse enseguida la parte dispositiva de la sentencia ante las partes presentes. Si surgiese alguna dificultad, el tribunal está facultado para diferir la sentencia durante cinco días útiles. La notificación a las partes del texto completo de esta sentencia deberá realizarse lo antes posible (131).

Este es el efecto más importante de la *restitutio in integrum*: se ha producido el efecto devolutivo; la causa volvió *ad pristinum statum* y el juez ha conocido de nuevo sobre el mérito de la misma y ha dado una sentencia definitiva. Los actos efectuados y basados en la sentencia impugnada han sido anulados, y en esta nueva sentencia se decide sobre la sustancia de la causa y también sobre la obligación de restituir y reparar los daños ocasionados.

### 3) Recursos

En el momento en que se ha notificado la sentencia a las partes, o a los procuradores mediante la entrega de un ejemplar de la misma, empiezan a correr los plazos para las posibles impugnaciones de la sentencia (132). La apelación afecta tanto a la sentencia que rescinde como a la que restituye (133). "Tal sentencia es, a su vez, susceptible de ser impugnada nuevamente por cualquier medio, incluso, si se dan los motivos establecidos por la ley, con la *restitutio in integrum*" (134). Pero en este caso, a nuestro parecer, sólo cabe impugnar la sentencia restitutoria no la rescisoria, que sólo es susceptible de apelación.

### 4) Ejecución

La sentencia contendrá el decreto de ejecución (135), que deberá regularse por los preceptos contenidos en los cc. 1650-1655. Las únicas salvedades para no ejecutar esta sentencia son que se haya vuelto a interponer nuevo recurso de *restitutio in integrum* o que se produzca algún supuesto de los contemplados en el c. 1654. Si se ha producido apelación, se suspenderá la ejecución de la sentencia conforme al c. 1638.

---

(131) Cfr. c. 1668.

(132) Cfr. cc. 1614-1615.

(133) Cfr. c. 1639 § 1, donde se da el doble objeto de la *Litiscontestatio*.

(134) MORENO, M., ob. cit., p. 422.

(135) Cfr. c. 1651.



Una vez ejecutada la sentencia se consigue el efecto buscado con este recurso extraordinario: volver las cosas a su estado originario y conseguir del juez un nuevo pronunciamiento sobre el mérito de la causa. Es un camino largo ofrecido por el Código para hacer frente a la sentencia válida pero injusta. De su naturaleza deducimos que sólo perdura en el aspecto formal un trato de favor muy limitado a la minoría de edad (c. 1946 § 3), respecto de los menores; mientras que en el material se aprecia el deseo de la consecución de la justicia mediante el pleno resarcimiento de una sentencia que se estima injusta. La *restitutio* es algo más que la obtención de una nulidad: implica alcanzar un nuevo pronunciamiento justo sobre la causa. Pero estas consideraciones serán objeto de un estudio más detallado.

### 3. Aspectos dogmático-jurídicos de la Restitutio in integrum

#### A. Definición de Restitutio in integrum

En este último apartado intentaremos dar una definición lo más exacta posible de la *restitutio in integrum*, así como profundizar en su naturaleza procesal.

Rescindir es "anular o dejar sin efecto un contrato, obligación, etc." (136). La doctrina civil equipara los términos anulabilidad y rescindibilidad y distingue claramente entre nulidad y anulabilidad. La figura canónica de rescindibilidad, donde se sustenta la *restitutio in integrum*, concluye Bonnemain, equivale a la civil de anulabilidad (137).

"Consiste la *restitutio in integrum* en la anulación de un acto estrictamente legítimo, por motivos de equidad" (138). Este término se acuñó en el Derecho Romano; así Huvelín dice "se llama *restitución in integrum*, al decreto por el cual el pretor, en virtud de su imperium, declara nulo un acto válido según el derecho civil, debido a que ese acto haya causado un perjuicio que el magistrado considera injusto. La *restitutio in integrum* se acuerda en ciertos casos en que hay un perjuicio resultante de la ley, y contra el cual la ley no otor-

---

(136) CASARES, J., Diccionario ideológico ..., ob. cit., voz 'rescindir'.

(137) Cfr. BONNEMAIN, J., La nulidad en el proceso canónico (tesis doctoral) (Pamplona, 1980), p. 352.

(138) Diccionario de Derecho Privado, ed. Labor (Barcelona, 1965) voz 'restitutio in integrum'



ga protección" (139).

En el Derecho canónico moderno podemos dar dos definiciones; la primera, ajustándonos al código de 1917, que abarca tanto la acción como el recurso, puede ser la siguiente: "remedio extraordinario para poder reparar un daño grave causado por un acto válido, judicial o extrajudicial. Este remedio no tiende a rescindir el acto rescindible, sino más bien a poner las cosas en el estado en que se hallaban antes de haberse puesto el acto causante del daño grave" (140). Ciñéndonos a la normativa vigente, debemos definirlo como el recurso específico y peculiar, de carácter extraordinario, para impugnar la sentencia manifiestamente injusta, pero válida, que ha pasado a cosa juzgada. En la actualidad la *restitutio in integrum* se configura como un recurso análogo al recurso de revisión de los ordenamientos civiles.

El estilo canónico perdura en esta figura jurídica que, no obstante, se ha visto muy influenciada por el recurso de revisión, del que no se puede separar porque son dos figuras afines provenientes de la misma raíz y con idéntica función: reparar del mejor modo posible el efecto de una sentencia injusta pero válida que ha adquirido firmeza en el Ordenamiento respecto.

#### **B. La cosa juzgada y el recurso de *restitutio in integrum***

Su relación es tan estrecha que el legislador canónico las regula en el mismo título. La cosa juzgada es "la obra terminativa de la cognición procesal, por resultar inimpugnabile mediante la vía de los recursos judiciales ordinarios" (141). Esta impugnabilidad o inatacabilidad puede ser formal

---

(139) HUVELIN, P., *Derecho romano* (Montevideo 1969), p. 184; un diccionario jurídico define este instituto como "Institución procedente del Derecho romano y mantenida en legislaciones posteriores, pero desaparecida en las modernas. Consistía en la obligación que era impuesta a una persona causante de un daño a otra, menor de edad o incapaz, o habiendo empleado intimidación o dolo, a fin de que repusiese las cosas al estado que tenían antes de producir la lesión, reintegrando al perjudicado en la totalidad de los bienes y derechos de que se le hubiese privado". OSSO RIO, M., *Diccionario de Ciencias jurídicas, políticas y sociales* (Buenos Aires, 1974), voz '*restitutio in integrum*', pp. 674-675.

(140) DEL AMO, L., *Sentencias, casos y cuestiones en la Rota Española* (Pamplona, 1977), p. 1004.

(141) DE DIEGO-LORA, C., *Código de Derecho Canónico, edición anotada* ..., ob. cit., p. 981.





o material (142); lo cual no significa que el legislador no tenga en cuenta la posibilidad de la injusticia de la sentencia, y por ello el mismo legislador limita la autoridad de la cosa juzgada y prevé modos de revisión de la sentencia, de carácter excepcional, que sin alterar la seguridad jurídica pública que se quiere conseguir con los efectos de la cosa juzgada, sean a la vez salvaguarda de los derechos privados de los fieles.

El c. 1642 expone dos especies -formal y material- de la cosa juzgada en Derecho canónico: "1. La cosa juzgada goza de la firmeza del derecho, y no puede impugnarse directamente, si no es de acuerdo con el c. 1645 § 1". De este precepto se deduce que contra todas las sentencias que han alcanzado la cosa juzgada a tenor del c. 1641 (143) ya no cabe más recurso que el extraordinario de *restitutio in integrum* (144). El § 2 se refiere al efecto de la cosa juzgada material: "La misma hace ley entre las partes y da lugar a acción y excepción de cosa juzgada, que puede también declarar el juez de oficio, para impedir que vuelva a introducirse la misma causa". Este texto inserta una novedad con respecto al código

---

(142) "Ahora bien, hay dos maneras distintas de atacar un cierto resultado procesal. Una es la manera directa o inmediata, que consiste en una impugnación de la decisión procesal en sí misma. Otra es la manera mediata o indirecta, que consiste en una discusión de los resultados procesales a través del rodeo que supone la apertura de un nuevo proceso, sobre la misma materia, en que puede llegarse a un resultado opuesto o contradictorio del anterior.

Cuando un resultado procesal no es directamente atacable, entonces se dice que goza de fuerza de cosa juzgada formal, pues formalmente no resulta ya discutible (preclusión de los medios de impugnación; cierre de la relación jurídico-procesal). En cambio, cuando no es atacable ni indirectamente, esto es, cuando no cabe abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema, entonces se dice que goza de fuerza de cosa juzgada material, pues lo que se impide precisamente es la discusión de la materia ya decidida. Cosa juzgada formal y cosa juzgada material son, en consecuencia, las dos especies básicas del instituto general de la cosa juzgada, que denotan la firmeza y autoridad de la cosa juzgada respectivamente". DE REINA, V., *La cosa juzgada en el proceso ordinario canónico* en "Ius Canonicum" VII (1968), p. 350. Vid. también GUASP, J., ob. cit., pp. 563-581, es uno de los tratadistas que con más acierto y profundidad ha estudiado los efectos de la cosa juzgada. LEGA-BARTOCETTI, ob. cit., pp. 1-11; DEL AMO, L., *La excepción del pleito acabado y la revisión de causa* en "Ius Canonicum" VI (1966), pp. 411-506; MORENO, M., ob. cit., p. 408; DE DIEGO LORA, C., ob. cit., vol. II, pp. 261-264.

(143) Exceptuando siempre las causas sobre el estado de las personas. Cfr. c. 1643.

(144) No hay que olvidar que se podrá declarar nula, por mucho que haya alcanzado los efectos de cosa juzgada, si la sentencia incurre en algún vicio de nulidad enumerado por los cc. 1620 y 1622, siempre que no hayan transcurrido los plazos de los cc. 1621 y 1623 respectivamente, pa-



anterior: la *exceptio rei iudicatae* no sólo es aplicable a la iniciativa de parte, sino que también es apreciable *ex officio*, pues pertenece al bien público de la Iglesia.

La sentencia que ha alcanzado firmeza, goza de la certeza del Derecho (145) y no se puede, por ende, impugnar directamente con recursos ordinarios. El verdadero recurso contra la autoridad de cosa juzgada es el recurso de revisión o de *restitutio in integrum*: "mediante tal recurso, las sentencias firmes son sometidas, por motivos taxativamente determinados, a una crítica de su contenido. La cual, en caso de llegar a su revocación, permite la apertura de un nuevo debate sobre la misma materia anteriormente decidida. Es, evidentemente, el triunfo definitivo de la justicia como objetivo del Derecho" (146).

Este recurso elimina la presunción de verdad inherente a la cosa juzgada porque como muy bien opina Prieto Castro "es más útil a la comunidad y al prestigio de los tribunales reconocer la existencia de una injusticia que defender hasta el último extremo la idea de la que se dice 'santidad de la cosa juzgada'" (147).

---

ra la ejecución de esta acción. Sólo desde la excepción (c. 1621) la nulidad insanable es perpetua.

(145) "La sentenza passata in giudicato gode della certezza del diritto o, come precisa il codice del 1917, gode della presunzione 'juris et de jure', cioè deve ritenersi 'giusta e vera' e non si può impugnare direttamente, se non in base a quanto dispone il Can. 1645 del nuovo codice, e cioè con la richiesta di 'restitutio in integrum' e nelle ipotesi tassativamente indicate dal medesimo canone. In quanto tale 'facit ius inter partes', cioè ha vigore di legge per le persone per le quali fu emessa. COLAGIOVANNI, E., *De re iudicata et restitutione in integrum* en *Dilexit Iustitiam* (Roma, 1984), p. 299.

(146) DE REINA, V., *ob. cit.*, p. 352.

(147) PRIETO CASTRO, L., *ob. cit.*, p. 592; LEON Y OLARIETA en *Observaciones filosófico-jurídicas acerca de la cosa juzgada*, "Revista general de Legislación y Jurisprudencia" 44 (1874); explica que ya en las legislaciones de los primeros pueblos como Israel, Egipto, Grecia, Roma ..., los fallos de los tribunales tenían un carácter religioso, casi sagrado, de ahí el término antiquísimo de 'santidad de cosa juzgada'; pero también desde el primer momento, anota, esta autoridad tenía sus límites, y así comenta "en el orden filosófico no puede reconocerse a persona alguna el don de la infalibilidad; el error va mezclado en la vida humana con la verdad y la ciencia con la ignorancia, como la luz con las tinieblas, y nadie puede pretender que se le reconozcan dotes superiores a las de los hombres" (p. 14) y más adelante afirma "La justicia quiere la luz, porque es hija de la verdad y rechaza las tinieblas" (p. 15). Por ello todas las legislaciones, desde antiguo, permiten la apertura del juicio en casos extraordinarios sobre materia ya juzgada.



La *restitutio in integrum*, como la revisión, son exigencias de la equidad, de la atemperación del derecho estricto y a la vez límites a la cosa juzgada.

### C. Naturaleza de la "Restitutio in integrum"

La *restitutio in integrum*, ¿es un verdadero recurso o es más bien una acción autónoma de impugnación?

La mayoría de los autores civiles consideran la revisión como una acción autónoma de impugnación. Demanda de revisión, demanda de reapertura, etc., son términos consecuentes con esa visión del citado remedio. En el Derecho civil no es propiamente recurso, pero en el Derecho canónico ¿la *restitutio in integrum*, es un recurso o no?. El código de 1917 lo califica de remedio extraordinario (148), mientras que en el nuevo cuerpo legal no encontramos referencia directa respecto a la calificación jurídica de la *restitutio in integrum*. El legislador no dice qué es; se limita a describir sus efectos jurídicos y deja a la doctrina la consideración de la naturaleza procesal de este instituto. A nuestro parecer estamos ante un verdadero recurso pero con las matizaciones que ya hemos hecho en otros lugares del presente trabajo: es un recurso extraordinario, tasado, y con dos momentos completamente diferenciados en su aplicación. El segundo momento -o *iudicium restitutorium*- parece obedecer más a una acción autónoma de impugnación que a un recurso, pero jurídicamente sigue siendo el mismo recurso que tiene como finalidad volver las cosas *ad pristinum statum*. En estos dos momentos procesales del recurso encontramos dos institutos jurídicos: el primero es a modo de casación (anulación de sentencia) y el segundo es un nuevo conocimiento del fondo de la causa impugnada.

La *restitutio in integrum* es un recurso con naturaleza propia que aúna dos institutos jurídicos de vida independiente pero que cuando actúan en la *restitutio* obedecen al todo que es el recurso.

### D. El recurso de "restitutio in integrum" y la casación civil

Ya dijimos en su momento que algunos canonistas han expuesto que la *restitutio in integrum* canónica obedece a la casación civil. En el presente estudio hemos intentado demostrar que no es así. No obstante, alguna razón tenían para ello; así Cabrereros de Anta opinaba: "En los actuales procesos civiles no se admite la restitución 'in integrum' contra la

---

(148) Cfr. c. 1905 § 1 del código de 1917.





sentencia. Pero en su lugar se ha puesto otra institución parecida, de carácter rescisorio, que es el llamado recurso de casación. Este recurso, en los procesos civiles, no se hace al mismo juez que dictó la sentencia ni al tribunal de apelación como tal, sino a un tribunal ya determinado por la ley y llamado de casación, que suele ser el Tribunal Supremo, pero no en función de apelación.

El recurso de casación, en los procesos civiles, no se concede con el fin de defender los intereses privados de las partes, como en los casos que se mencionan en los tres primeros números del c. 1905 § 2, sino para defender la pureza e integridad de la ley, o sea para restablecer el imperio del derecho objetivo -su recta interpretación o su adecuada aplicación al caso-, así como para custodiar el derecho procesal evitando el quebrantamiento de forma. Bajo este aspecto, el recurso civil de casación se basa en el mismo motivo que nuestro Código señala en el número 4º del c. 1905 § 2. En todo caso, aunque el recurso de casación no se proponga directamente proteger los derechos privados, es claro que consigue también este efecto al casar y rescindir la sentencia anterior poniendo en su lugar otra más conforme a ley.

El recurso civil de casación, como nuestra restricción 'in integrum', aunque se instituye en principio porque no se admite la tercera sentencia conforme, en realidad viene a sustituir a la tercera sentencia en algunos casos excepcionales en los que verdaderamente sería necesaria" (149).

Efectivamente el n.º. 4 del c. 1905 daba pie a equiparar la **restitutio in integrum** con la casación tanto por infracción de ley, o de fondo, como por quebrantamiento de forma, o de forma sin más. Cuando la comisión de reforma añadió la observación "**legis non mere processualis**" cerró toda posibilidad de equiparación con la casación por quebrantamiento de forma. Ahora sólo cabría decir que este supuesto del c. 1645 da entrada a la casación por infracción de ley.

No obstante, pensamos que este recurso de **restitutio** no se puede equiparar con la casación, sino con la revisión. El problema no está tanto en la **restitutio** como en la distinción neta entre estos dos recursos civiles. Guasp estudiándolo en el Ordenamiento español, pero aplicable también a otros Ordenamientos, intenta establecer la diferencia entre los dos recursos y creemos que con este texto se entenderá mejor nuestra opinión.

"La respuesta no es fácil de establecer, por la incomprensión del legislador de la verdadera esencia de estas impugnaciones. Pero en realidad la idea discriminadora puede obtenerse sobre la base de concebir a la casación como la im-

---

(149) CABREROS DE ANTA, M., Comentarios ..., ob. cit., pp.642-643.

pugnación de una resolución judicial por motivos inmanentes al proceso en que la resolución se dicta, dejando, para la revisión aquella impugnación, también suprema, que se funda en motivos trascendentes, o sea, situados fuera del proceso en que la resolución se ha dictado.

Si una sentencia es casada porque el Juez al fallar vio ló el derecho aplicable a las pretensiones de las partes, eT motivo de la rescisión se encuentra en un elemento situado dentro del proceso en que el error judicial se produce. En cambio, si una sentencia es revisada porque, con posterioridad a su pronunciamiento, el documento que en ella actuó fue declarado falso, el motivo de la rescisión está en una circunstancia, la falsedad del documento, que no aparecía dentro del proceso correspondiente, sino fuera de él, de un modo trascendente, que diferencia a esta hipótesis de la anterior. Por lo tanto, es propio de la casación esa limitación a las circunstancias inmanentes al proceso a que se refiere, mientras que es propio de la revisión el fundarse en circunstancias trascendentes en relación a ese mismo proceso" (150).

La inobservancia de una prescripción no meramente procesal trasciende al proceso por lo que técnicamente debería considerarse como motivo de revisión y no de casación, que es a la postre lo que ha hecho el legislador canónico. Ahora bien, nos tenemos que preguntar hasta qué punto interesa seguir manteniendo el recurso de *restitutio in integrum* por este motivo (151), porque es obvio que, aunque la cosa juzgada tiene sus límites, también se debe asegurar su necesaria firmeza. El profesor De Diego es de la opinión que "una sentencia que adquirió firmeza no debe ser sometida a un juicio posterior sobre su adecuación o rectitud jurídica" (152). A nos<sup>o</sup>

---

(150) GUASP, J., ob. cit., p. 1424.

(151) El profesor De Diego-Lora formulaba, hace unos años, sus dudas sobre la necesidad de mantener la *restitutio* por este motivo: "...-nos tememos- que esta preocupación de la relación del esquema, por sustraer las nulidades, por infracción de leyes procesales, de la *restitutio in integrum*, ha hecho que se olvide -ya resuelto tal problema- de los otros que la propia *restitutio* plantea, entre ellos, el de si vale la pena mantener este recurso por infracción de la ley material. Sigue exigiendo una nueva regulación, a nuestro parecer, la *restitutio*, más perfecta y acabada". DE DIEGO-LORA, C., ob. cit., vol. II, pp. 338-339.

(152) Pocas líneas después se expresa del siguiente modo: "Con el derecho no ocurre como con los hechos sometidos al juicios, que pueden ser falseados, moldeados de algún modo, al ser expuesto al juez o al mostrárselos mediante la prueba. El derecho debe ser conocido por el juez; éste debe saberlo aplicar. Cuando una sentencia adquiere firmeza, ha de presumirse, *iuris* et de *iure*, que es irreprochable desde el punto de vista jurídico. Si no, jamás se dará la seguridad del derecho". Ibid., p. 320.



tros nos parece correcta esta línea de pensamiento, más cuando la casación está en crisis, y la equidad se salvaguarda con el instituto de *restitutio in integrum*. Como opina Bonnemain: "Se podría decir, en cierta medida, que lo que se pretende es dar 'un voto de confianza al juez canónico'. Declarar mayor de edad y responsable a todo el Ordenamiento judicial de la Iglesia. Se propone, pues, eliminar, como causa para la *restitutio*, las infracciones legales, tanto las materiales como las formales, confiando en la garantía que la organización judicial ofrece y en la eficacia de los otros medios de impugnación para los defectos formales e injusticias materiales" (153).

Estas opiniones formuladas antes de la redacción definitiva del *codex* no han sido acogidas; pero pensamos que para ser coherentes con la misma legislación canónica, este recurso de *restitutio in integrum* debe considerarse siempre como revisión y no como casación (154); para ello se debe interpretar de modo restrictivo el n.º. 4 del c. 1645.

#### **E. Consideraciones sobre el supuesto 4º del c. 1645**

Para impedir que el recurso de *restitutio in integrum* se pueda identificar con el recurso de casación civil es necesario restringir la interpretación del supuesto contemplado en el n.º. 4 del c. 1645, entendiéndolo sólo aplicable a aquellos casos en los que la violación se ha producido por dolo del juez. Esta afirmación tiene muchos puntos atacables, pero también tiene otros muy defendibles y por ello la sostenemos. En principio se podría decir "*restringenda sunt odiosa ...*" o aquel otro principio jurídico "*Ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus*". Con esta restricción lo que pretendemos es cambiar un supuesto de derecho por uno de hecho. Una violación de una prescripción legal por parte del juez puede deberse a ignorancia, descuido o dolo; más conductas no encontramos. Ignorancia no cabe, porque se presume que el juez debe conocer la Ley; el descuido es poco admisible porque las partes aportan el derecho y el juez se tiene que pronunciar sobre él. Debemos pensar que muchas violaciones de prescripciones legales materiales se deben a una conducta dolosa del juez. El canon contempla el resultado, no la conducta del juez, pero ésta es la que produce el hecho motivo de la *restitutio in integrum*.

Los Ordenamientos civiles admiten el dolo del juez -en

---

(153) BONNEMAIN, J., ob. cit., p. 342.

(154) No olvidemos que el recurso de casación se debe interponer antes de que la sentencia adquiera firmeza, y su interposición está sujeta a un plazo muy estricto. Cfr. por ejemplo, art. 1694 LEC.





sus diversas calificaciones de cohecho, prevaricación, etc., mientras que el Ordenamiento canónico sólo regula el dolo de la parte. Esta es la única diferencia notable entre la restitución canónica y la revisión civil.

La opinión que sustentamos es la de restringir conceptualmente el supuesto de violación de ley no procesal al dolo del juez, pero no mantenemos, sin embargo, que en la práctica se deba demostrar este *animus doloso*, sino que basta que se produzca el resultado material de una violación de ley sustantiva. Pedir, como en los Ordenamientos civiles, que se demuestre en la práctica el dolo del juez, es cargar a la parte con una prueba difícil que no nos parece justo admitir.

Parezca correcta o no, esta interpretación es la única capaz de sustraer el recurso de casación del Ordenamiento jurídico de la Iglesia, porque: "Lo que no se debe concebir es el recurso contra la sentencia que adquirió firmeza, si no es por el recurso de revisión, de naturaleza excepcional y extraordinaria, versando siempre sobre supuestos de hecho - falseados de algún modo en el juicio anterior-, nunca sobre la calificación jurídica realizada" (155).

## CONCLUSIONES

### I. Histórico-jurídicas

1. El actual recurso de *restitutio in integrum* deriva del Derecho Romano, pero ha sufrido tal evolución que puede afirmarse, sin lugar a dudas, que se parece más al recurso de revisión de los Ordenamientos civiles de tipo latino que al primitivo romano. Sobra añadir que tales Ordenamientos también tienen su origen en el Derecho Romano. Lo cual no implica, en modo alguno, que este recurso canónico haya perdido la singularidad propia y original, a la par que originaria, de volver las situaciones jurídicas *ad pristinum statum*.

2. La *restitutio in integrum*, desde su aparición, se ha dirigido siempre contra actos jurídicos válidos. Ha sido un remedio extraordinario concedido para atemperar el rigor del derecho estricto en aquellos casos en los que la injusticia de un acto válido causaba una lesión al particular. Aunque su desarrollo histórico ha sido complicado, pues ha ido muy unido al tratamiento de la nulidad del acto jurídico que durante muchos siglos ha sido un tema enmarañado y oscuro,

---

(155) DE DIEGO-LORA, C., *ob. cit.*, vol. II, p. 321. El motivo contemplado en el n.º. 5 del c. 1645 es un hecho. La decisión precedente de otro juez o tribunal es un hecho que el juez no tiene obligación de conocer o por lo menos con la misma fuerza con que debe conocer la ley general.



la injusticia es -y ha sido- el fundamento más profundo de este instituto jurídico. La injusticia se materializa en la lesión producida y en la posibilidad de prueba de alguno de los supuestos contemplados por el legislador.

3. El carácter extraordinario de este recurso en los ordenamientos romano y canónico primitivo proviene de que con este remedio se impugnaba un acto válido aunque injusto; mientras que a partir del s. XVIII el criterio por el que se considera extraordinario es por su actuación en segunda apelación, en el caso de dos sentencias conformes.

4. En los albores de la codificación, el Derecho francés elaboró dos institutos jurídicos de capital importancia para el Ordenamiento procesal: la casación y la revisión. En 1816, el legislador canónico regula la *restitutio in integrum* como un remedio jurídico que recoge, a la vez, capítulos de revisión y de casación. En la actualidad, bajo el epígrafe "violación de una ley no meramente procesal" del c. 1645, § 2, n. 4 se esconde la casación por infracción de ley.

5. La distinción tripartita hecha por el Código de 1917 -acción de *restitutio in integrum* para reparar un daño, *restitutio in integrum* como gracia concedida al contumaz y el recurso de *restitutio in integrum*- ha quedado reducida en el Código de 1983 a la sola consideración del recurso contra las sentencias que ponen fin a la cuestión litigiosa y de las que consta manifiestamente su injusticia.

6. El Código de 1983 mejora en algunos aspectos la regulación de este instituto. No obstante, opinamos que la polémica sobre los límites entre nulidad y rescindibilidad pesó tanto a la hora de elaborar la nueva normativa, que la reforma se ciñó, casi exclusivamente, a señalar el tipo de ley a que hace referencia el n.º. 4 del c. 1645.

## II. Teórico-jurídicas y de procedimiento

1. En el Código de 1983 se configura como un verdadero recurso procesal, de carácter extraordinario, limitado a los supuestos tasados en el c. 1645 y sólo para las causas que han pasado a cosa juzgada. Por lo tanto, no cabe, para las causas matrimoniales y otras donde se ventilen cuestiones sobre el estado de las personas.

2. La manifiesta o evidente injusticia es condición para admitir el recurso -actúa como *fomus boni iuris* de la de-



manda- y es, al mismo tiempo, una exigencia que debe ser probada que se valora en la sentencia. Por ello, aunque la sentencia viciada sea objetivamente injusta, el recurrente debe demostrarlo mediante la prueba de alguno de los supuestos contemplados en el c. 1645.

3. El contenido del recurso es la pretensión de rescisión de la sentencia primitiva que se considera injusta. Al proponer el recurso se intenta rescindir la sentencia injusta y el mismo proceso en lo que quede afectado por el vicio alegado, volviendo las situaciones jurídicas derivadas de la sentencia impugnada ad pristinum statum.

4. Los supuestos contemplados en el c. 1645 no difieren sustancialmente de las causas previstas para el recurso de revisión de los Ordenamientos civiles estudiados. Sin embargo una de las diferencias fundamentales es el distinto tipo de órgano jurisdiccional utilizado para conocer este recurso: los Ordenamientos civiles lo reducen al conocimiento exclusivo del Tribunal Supremo, mientras que en la Iglesia es competente, en principio, el mismo juez o tribunal que dictó la sentencia impugnada.

5. El recurrente debe demostrar la falsedad de la prueba y también que la parte dispositiva de la sentencia se ha basado sustancialmente en ella. Para que prospere el recurso de falsedad debe haberse descubierto después de dictar la sentencia.

6. Los documentos recobrados deben ser decisivos, esto es, que si se hubieran aportado en el proceso, el contenido de la sentencia firme hubiera sido distinto; y los hechos que vos han de ser de tal importancia que si el juez los hubiera podido apreciar al dictar sentencia, ésta hubiera tenido un sentido contrario. Pensamos que el juez sólo debe admitir documentos en sentido estricto: las escrituras aptas para probar en juicio.

7. El dolo provendrá necesariamente de una de las partes. No se excluye la connivencia del juez, lo que permitiría acudir al juicio penal. El recurso basado en este capítulo prosperará cuando la sentencia sea el resultado directo del dolo, aunque no exclusivo, de modo que si no hubiera existido esa actitud dolosa de la parte, la sentencia no se hubiera dictado con el mismo contenido con que se dictó.

8. El evidente menosprecio de una ley sólo alcanza a aquellos actos que son considerados como leyes; se restringe a leyes materiales, o mejor, no meramente procesales. Este





motivo según su propia naturaleza, es de casación y no de revisión, ya que es un motivo de derecho y no de hecho que trasciende al proceso. Corresponde más bien a la casación por infracción de ley de los Ordenamientos civiles.

9. El supuesto 5º del c. 1645 contempla la contradicción de la sentencia impugnada con una decisión precedente que ha pasado a cosa juzgada. Entendemos que entre estas dos sentencias debe producirse la triple identidad regulada en el c. 1641, 1: las mismas personas, igual petición e idéntica causa de pedir.

10. Pensamos que el procedimiento más adecuado para ventilar este recurso es el contencioso oral.

11. El procedimiento culmina con una sentencia si deniega el recurso, y con dos sentencias en caso de concesión. La primera rescinde la sentencia impugnada, y la segunda entra a conocer el fondo del asunto: las peticiones de las partes tal como se expresaron en la fórmula de dudas del proceso revisado.

12. La *restitutio in integrum* es algo más que la obtención de una nulidad: implica alcanzar un nuevo pronunciamiento justo sobre la causa.

13. A nuestro juicio, es preciso alejar de este instituto cualquier motivo de casación, porque es ajeno a su naturaleza; proponemos, para una posterior revisión posible del texto legal, la conveniencia de suprimir el n. 4 del c. 1645. A este mismo resultado se podría llegar ya si se interpreta restrictivamente este supuesto: considerar sólo aquellas violaciones que se produzcan por dolo del juez. Se cambia un supuesto de derecho por uno de hecho.

14. Desde el punto de vista conceptual habría que admitir como causa independiente -o subcausa- el dolo del juez, que los diversos Ordenamientos civiles lo recogen como supuesto de concesión de revisión de la sentencia.

## BIBLIOGRAFIA

### A. Fuentes

Acta Apostolicae Sedis, Romae, 1909 ss.



**Acta Sanctae Sedis, Romae 1867-1909.**

**Bullarii Romani Continuatio, BARBERI, A.-SPETIA, A., Romae 1835 (reimpr. Graz 1964, por la Akademische Druck. U. Verlagsanstalt).**

**Canones et Decreta Concilii Tridentini, RICHTER, A., Lipsiae 1853.**

**Codicis Iuris Canonici Fontes, GASPARRI, G.-SEREDI, I., Typis Polyglottis Vaticanis 1938.**

**Código de Derecho Canónico, con comentarios de MIGUELEZ, L., ALONSO, S., y CABREROS, M., 4ª ed. bilingüe B.A.C., Salamanca, 1962.**

**Codice di Procedura Civile, ed. comentada por SATTA, S., Padova 1967.**

**Código de Derecho Canónico, ed. anotada a cargo de P. LOMBARDIA y J.I. ARRIETA, 1ª ed., Ediciones Universidad de Navarra; Pamplona 1983.**

**Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis Iacobi Gothofredi, Georg Olms, New York 1975.**

**Código Teodosiano, A. DE BACARDI, Barcelona 1874.**

**Codicis Iuricis Canonici Schemata, De Processibus I, ROBERTI, In civitate Vaticana 1940.**

**Corpus Iuris Canonici, FRIEDBERG, Graz 1956.**

**Decretales de Gregorio IX, MANS PUIGARNAU, J., Barcelona 1940.**

**Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, OSSORIO, M., Buenos Aires, 1974.**

**Diccionario de Derecho Privado, ed. Labor, Barcelona 1967.**

**Diccionario ideológico de la Lengua Española, CASARES, J., Barcelona 1966.**

**Digesto de Justiniano, ed. Aranzadi, Pamplona 1968.**

**Index librorum prohibitorum, Roma, 1948.**

**Justinianus Digesta, de KRUGER y MOMMSEN, Berolini 1962.**

**Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonicae editae, OCHOA, X., Roma 1972.**

**Ley de Enjuiciamiento Civil, ed. Civitas, 7ª ed., Madrid 1984.**



**Nouveau Code de Procedure Civile**, ed. comentada por E. BLANC, París 1978.

**Novissimo Digesto Italiano**, Torino 1960-62.

**Ordinamento giudiziario e Codice di Procedura Civile dello Stato della Città del Vaticano**, Typis Polyglottis Vaticanis 1946.

**Quinque Compilationes Antiquae**, FRIEDBERG, Graz 1956.

**Sacrae Rotae Romanae decisiones recentiores in compendium redactae**, t. IV, Mediolani 1781.

**Sanctissimi Domini Nostri Benedicti papae XIV Bullarium**, OCCHI, B., Venetiis 1768.

**Sentencias, casos y cuestiones en la Rota Española**, DEL AMO, L., Pamplona 1977.

**Zivilprozessordnung**, München 1974.

#### **B. Sentencias Rotales**

- 18.2.1919, SRRD, c. Rossetti, 11 (1919), 3, pp. 17-33  
8.4.1919, SRRD, c. Sincero 9 (1919) 12, p. 106  
19.5.1921, SRRD, c. Maxximi, 11 (1921), 11, p. 112  
19.1.1923, SRRD, c. Rosseti, 15 (1923), 2, p. 12  
16.2.1925, SRRD, c. Jullien, 17 (1925), 11, p. 83  
29.3.1927, SRRD, c. Manucci, 19 (1927), 12, pp. 94-97  
5.8.1927, SRRD, c. Parrillo, 19 (1927), 34, pp. 276-298  
27.4.1928, SRRD, c. Florczack, 20 (1928), 12, p. 130  
11.3.1930, SRRD, c. Parrillo, 22 (1930), 13, p. 155.  
27.3.1931, SRRD, c. Grazioli, 23 (1931), 13, p. 105.  
11.4.1935, SRRD, c. Wymen, 27 (1935), 25, pp. 216-226  
27.5.1939, SRRD, c. Janasik, 31 (1939), 35, p. 323  
22.2.1941, SRRD, c. Canestri, 33 (1941), 13, pp. 121-129  
30.6.1941, SRRD, c. Teodori, 33 (1941), 66, pp. 708-709  
22.11.1941, SRRD, c. Canestri, 33 (1941), 80, p. 870.  
7.7.1943, SRRD, c. Quatrocolo, 35 (1943), 53, p. 540  
7.10.1949, SRRD, c. Staffa, 41 (1949), 77, p. 475  
12.11.1949, SRRD, c. Wymen, 41 (1949), 82, p. 501  
3.12.1949, SRRD, c. Felici, 41 (1949), 85, p. 536  
12.1.1954, SRRD, c. Fidecicchi, 46 (1954), 4, p. 16





- 10.3.1954, SRRD, c. Wynn, 46 (1954), 49, p. 212.  
18.5.1956, SRRD, c. Sabattani, 48 (1956), 11, p. 453  
16.2.1957, SRRD, c. Wynn, 49 (1957), 26, pp. 101-102  
26.3.1957, SRRD, c. Felici, 49 (1957), 58, p. 236  
28.11.1957, SRRD, c. Pinna, 49 (1957), 201, pp. 761-762  
13.3.1958, SRRD, c. Sabattani, 50 (1958), 47, pp. 143-155  
17.11.1958, SRRD, c. Heard, 50 (1958), 199, p. 632  
27.11.1958, SRRD, c. Brennan, 50 (1958), 205, pp. 660-661  
7.6.1961, SRRD, c. Canals, 53 (1961), 71, p. 306.  
25.1.1962, SRRD, c. Mattioli, 54 (1962), 5, pp. 11-12  
25.1.1962, SRRD, c. Sabattani, 54 (1962), 53, p. 284  
7.6.1962, SRRD, c. Brennan, 54 (1962), 58, pp. 314-315  
18.7.1962, SRRD, c. Bonet, 54 (1962), 82, p. 410  
8.11.1963, SRRD, c. Anné, 55 (1963), 131, pp. 754-761  
22.5.1965, SRRD, c. Filipiak, 57 (1965), 82, p. 426  
23.11.1966, SRRD, c. Jorio, 58 (1966), 164, pp. 838-850  
19.6.1968, SRRD, c. Bonet, 60 (1968), 129, pp. 456-459  
22.1.1969, SRRD, c. Palazzini, 61 (1969), 16, p. 79  
30.1.1970, SRRD, c. Abbo, 62 (1970), 20, pp. 93-96  
19.1.1971, SRRD, c. Canals, 63 (1971), 11, pp. 47-52  
18.2.1974, SRRD, c. Egan, 66 (1974), 29, pp. 98-104  
8.5.1974, SRRD, c. Davino, 66 (1974), 88, pp. 357-362

#### C. Sentencia del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica

- 16.10.1982, c. Sabattani. Cfr. "Periodica", LXXII (1983), pp. 113-128

#### D. Autores

- ALCALA-ZAMORA, N.      Estudios procesales (Madrid 1975)  
ARIAS-RAMOS, J.,      Derecho romano clásico (Madrid, 1960)  
BADII, C.,      La "restitutio in integrum" nella legislazione canonica vigente, en "Diritto Ecclesiastico" (1928)  
BALDO DEGLI URBALDI,      In decretalium volumen commentaria (Ve



- netiis, 1595).
- BAÑARES, J.I., Evolución y naturaleza del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica (tesis doctoral) (Pamplona 1979).
- BARBOSA, A., In Ius pontificium universum, T.I (Lugduni, 1716).
- BENITEZ, J., Sobre la ampliación de la "restitutio in integrum" a las resoluciones que tengan carácter definitivo, en "Ius Canonicum", vol. XIV, nº. 27, 1974.
- BLAT, A., Commentarium textus Codicis Iuris Canonici, lib. IV, De Processibus (Romae, 1927).
- BONNEMAIN, J., La nulidad en el proceso canónico (Tesis doctoral) (Pamplona, 1980).
- BONNET, P.A., Il giudizio di nullità matrimoniale nei casi speciali (Roma, 1979).
- CABREROS DE ANTA, M., Comentarios al Código de Derecho canónico, vol. III (Madrid, 1962).
- Nuevos estudios canónicos (Vitoria, 1966).
- CALAMANDREI, P., La casación civil (Buenos Aires, 1945).
- CALVO SANCHEZ, M<sup>a</sup>. del C., La revisión civil (Madrid, 1977).
- CAPELLO, F.M., Summa Iuris Canonici, vol. III (Roma, 1955).
- CARRELLI, E., Sul "Beneficium restitutionis" en Studia et documenta historiae et iuris (Roma, 1938).
- CAVALLARIO, D., Instituciones del Derecho Canónico (Madrid, 1847) t. IX.
- CERVENCA, G., Studi vari sulla "restitutio in integrum" (Milán, 1965).
- CIOFFI, A., Commento teorico pratico del Codice di Procedura Civile, vol. II (Roma, 1957).
- COLAGIOVANNI, E., De re iudicata et restitutione in integrum en Dilexit Iustitiam (Roma, 1984).



- CORONATA, A., *Institutiones Iuris Canonici*, 4ª. ed. vol. III (Torino, 1950).
- COVIAN, *De la revisión en materia civil*, en *Revista de los Tribunales* (Madrid, 1898).
- CRNICA, A., *Defectus Codicis iuris canonici in designandis Normis pro querela nullitatis*, en "*Ius Pontificium*", 15 (1935).
- CHIOVENDA, G., *Instituciones de Derecho procesal civil*, vol. III (Madrid, 1954).
- D'ANGELO, S., *Un caso di restituzione in integrum nella disciplina canonica*, en *Saggi su questioni giuridiche* (Torino, 1928).
- De restituzione in integrum iuxta c. 1905, 2, 4º*, en "*Periodica*", 18 (1929).
- DA TRANI, G., *Summa super titulis decretalium* (Lyon, 1519).
- DE BUTRIO, A., *Super prima aprimi Decretalium commentarii* (Venetiis, 1628).
- DE DIEGO-LORA, C., *Estudios de Dereho canónico*, vols. I y II (Pamplona, 1973).
- Del pasado al futuro de la "res iudicata" en el proceso canónico*, en "*Ius Canonicum*", vol. XIII, nº. 25, 1973.
- Naturaleza y supuesto documental del proceso "in casibus specialibus"*, en "*Ius Canonicum*", vol. XIV, nº. 27, 1974.
- DE LA OLIVA, A.-FERNANDEZ, M., *Lecciones de Derecho Procesal* (Barcelona, 1984).
- DE LUCA, J.B., *Theatrum veritatis et iustitiae* (Venetiis, 1726).
- DE REINA, V., *La cosa juzgada en el proceso ordinario canónico*, en "*Ius Canonicum*", vol. III, nº. 14, 1968.
- DEL AMO, L., *La excepción del pleito acabado y la revisión de causa*, en "*Ius Canonicum*", vol. VI, nº. 9, 1966.
- Sentencias, casos y cuestiones en la Rota Española* (Pamplona, 1977).





- DEL GIUDICE, V.,                   Nociones de Derecho canónico (Pamplona, 1964).
- DELLA ROCCA, F.,                   Derecho canónico (Madrid, 1962).
- Il neglectus legis come motivo di "restitutio in integrum" nel processo canonico, en Saggi di diritto processuale canonico (Padova, 1961).
- Il processo in Graziano, en Saggi di diritto processuale canonico (Padova, 1961).
- La nullità della sentenza nel diritto canonico (Roma, 1939).
- D'ORS, A.,                         Derecho Privado romano (Pamplona, 1968).
- D'OSTILLO,                        La storia del nuovo Codice di diritto canonico (Città del Vaticano, 1985).
- DOVAL DE MATEO, J.,             La revisión civil (Barcelona, 1979).
- DURANTE, G.,                    Speculum Iudicialis (Lugduni, 1547).
- EICHMANN, E.,                    El Derecho procesal según el Código de Derecho Canónico, Trad. de N. Soto y A. Sanz (Barcelona, 1931).
- EICHMANN-MOERSDORF,           Lehrbuch des Kirchenrechts, vol. III (Paderborn, 1964).
- FAIREN, V.,                       Notas sobre la intervención principal en el proceso civil, en Estudios de Derecho Procesal (Madrid, 1955).
- La transformación de la demanda en el proceso civil (Santiago de Compostela, 1949).
- FUENTESECA, P.,                 Las "Legis actiones" como etapas del proceso romano, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 34 (1964).
- GARCIA GARRIDO, M.,            Sobre los verdaderos límites de la ficción en Derecho Romano, en "Anuario de Historia del Derecho Español", 27-28 (1957-58).
- GHIDOTTI, E.,                    La Nullità della sentenza giudiziale nel diritto canonico (Milano, 1965).
- GIL DE LAS HERAS, F.,          ¿Se puede admitir la restitución "in integrum" en las causas matrimoniales?



- en "Ius Canonicum", vol. XIV, nº. 27, 1974.
- GOMEZ ORBANEJA-  
HERCE QUEMADA,      Derecho Procesal Civil (Madrid, 1975).
- GONZALEZ TELLEZ, E.,      *Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX* (Lugduni, 1715).
- GORDON, I.,      *Discorso generale sui libri IV e V del Codex*, en "Apollinaris", 52 (1979).
- Normae speciales Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae*, en "Periodica", 59 (1970).
- GUASP, J.,      Derecho Procesal Civil (Madrid, 1961).
- HANSSEN, A.,      *De sanctione nullitatis in processu canonico*, en "Apollinaris" 11-12 (1938-1939).
- HENRICUS DE SEGUSIO  
(Card. Hostiensis)      *In primum decretalium librum commentaria* (Torino, 1965).
- HUVELIN, P.,      Derecho Romano (Montevideo, 1969).
- IOANNIS ANDREAS,      *In quinque decretalium libros novella commentaria* (Torino, 1963).
- JONE, H.,      *Commentaria in Codicem Iuris canonici III* (Padeborn, 1955).
- LALINDE, J.,      Derecho histórico español (Barcelona, 1974).
- LEGA, M.-  
BARTOCETTI, V.,      *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, vols. I y III (Roma, 1950).
- LENEL, O.,      *Das edictum Perpetuum* (Leipzig, 1956).
- LEON Y OLARIETA,      *Observaciones filosófico-jurídicas acerca de la cosa juzgada*, en "Revista general de Legislación y Jurisprudencia", 44 (1874).
- LEVY, E.,      *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (romanistisches Abteilung)* (Berlín, 1951).
- LONGO, G.,      *Contributi alla doctrina del dolo* (Padova, 1937).
- MADERO, L.,      *La intervención de tercero en el proce*



- so canónico (Pamplona, 1982).
- MENESTRINA, F., *Il processo civile nello Stato Pontificio, en Scritti giuridici vari* (Milano, 1964).
- MORENO, M., *Derecho procesal canónico, vol. I* (Barcelona, 1975).
- MUNIZ, T., *Procedimientos eclesiásticos, vol. III* (Sevilla, 1919).
- MURGA, J.L., *Derecho romano clásico. II El proceso* (Zaragoza, 1980).
- NAZ, R., *Droit canonique, t. IV* (París, 1954).
- PILLI, TANCREDI, GRATIAE, *Libri de iudiciorum ordine* (Gollingae, 1842).
- PIRHING, H., *Universum Ius Canonicum secundum titulos Decretalium distributus nova methodo explicatum* (Dillingen, 1637).
- PRIETO CASTRO, L., *Tratado de Derecho procesal civil, t. II* (Pamplona, 1985).
- RAGGI, L., *La "restitutio in integrum" nella "cognitio extra ordinem"* (Milano, 1965).
- Studi sulle impugnazioni civili nel processo romano* (Milano, 1961).
- REGATILLO, E.F., *Institutiones Iuris Canonici, vol. II* (Santander, 1951).
- REIFFENSTUEL, A., *Ius ecclesiasticum universum, t. I* (Veneziis, 1752).
- ROBERTI, F., *Circa limites querellae nullitatis et restitutionis in integrum, en "Apollinarius", I* (1928).
- De processibus, vols. I y II* (C. del Vaticano, 1956).
- ROBLEDA, O., *La nulidad del acto jurídico* (Roma, 1964).
- Quaestiones Disputatae Iuridico Canonicae* (Roma, 1969).
- Nullitas sententiae in iure retractato, en "Periodica", 63* (1974).





- ROSENBERG, L.,                      *Tratado de Derecho Procesal Civil* (Buenos Aires, 1955).
- SANTI,                                *Praelectiones iuris canonici* (Ratisbonae, 1886).
- SATTA, S.,                            *Diritto processuale civile*, 7ª ed. (Padova, 1967).
- SAVIGNY, M.,                        *Sistema del derecho romano actual*, t. VI. Trad. de Meña y Poley (Madrid, 1930).
- SCHMALZGRUEBER,                *Ius Ecclesiasticum Universum* (Roma, 1844).
- SCHONKE, A.,                        *Derecho Procesal Civil* (Barcelona 1950).
- SCHULZ, F.,                         *Classical roman law* (Oxford, 1950).
- Derecho romano clásico* (Barcelona, 1961).
- VALDRINI, P.,                        *Injustices et droits dans l'Eglise* (Strasbourg, 1983).
- VINCENT, J.-                         *Procedure civile* (Paris, 1981).
- GUINCHARD, S.,
- WERNZ, F.,                            *Ius Decretalium*, t. V (Prati, 1914).
- WERNZ, F.-                           *Ius Canonicum*, t. VI, *De Proccesibus*
- VIDAL, P.,                            (Roma, 1927).
- ZAMPETTI, G.,                        *Prove, sentenza, apelli in diritto Canonico*, en "Apollinaris", 52 (1979).